

¿Víctimas o victimarias?

Criminalidad femenina de cuello blanco



Autora: María del Carmen Cordón Prieto

Tutora: María Acale Sánchez

Máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía

Curso 2016/2017

Cádiz, Septiembre de 2017

¿Víctimas o victimarias?

Este trabajo ha sido elaborado como requisito para la obtención del título de máster en el programa de estudios de género, identidades y ciudadanía, correspondiente al curso académico 2016/2017.

María Acale Sánchez, como directora del Trabajo Fin de Máster realizado por la alumna Carmen Cordón Prieto titulado “Víctimas o victimarias: la criminalidad femenina de cuello blanco” en el Máster “Género, Identidades y Ciudadanía”, mediante este escrito, AUTORIZO su depósito y defensa.

Jerez, a 12 de septiembre de 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Acale Sánchez', is written on a light-colored background.

Fdo. María Acale Sánchez

ÍNDICE.

LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	3
RESUMEN.	4
INTRODUCCIÓN.....	5
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.	6
HIPÓTESIS.....	7
OBJETIVO GENERAL.....	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
METODOLOGÍA.....	8
CAPÍTULO I. LA CRIMINALIDAD FEMENINA: EL ASUNTO PENDIENTE DE LA CIENCIA CRIMINOLÓGICA.....	11
CAPÍTULO II. APROXIMACIÓN TEÓRICA: DELITOS DE CUELLO BLANCO.....	17
CAPÍTULO III. COMPARACIÓN ENTRE LAS TIPOLOGÍAS DELICTIVAS CONVENCIONALES Y LAS RELATIVAS A LA CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO.....	20
CAPÍTULO IV: EXCUSAS ABSOLUTORIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.....	46
CAPÍTULO V: TEORÍA DEL AMOR. ¿NUEVA ESTRATEGIA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD?	51
CAPÍTULO VI: ¿REALMENTE EXISTE LA IGUALDAD ANTE LA LEY?....	61
CAPÍTULO VII: EL IMPACTO MEDIÁTICO DE LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO.....	67
CONCLUSIONES.....	72
BIBLIOGRAFÍA.....	77

LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS.

CP: Código Penal.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

JUR: Jurisprudencia.

LO: Ley Orgánica.

RAE: Real Academia Española.

SAP: Sentencia Audiencia Provincial.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

TBC: Trabajo en Beneficio de la Comunidad.

TS: Tribunal Supremo.

RESUMEN.

A través de este trabajo se pretende hacer un recorrido por la historia de la criminalidad femenina, para conocer cómo se han ido elaborando las teorías criminológicas tradicionales, las cuales han sido catalogadas en numerosas ocasiones como misóginas por diversas criminólogas feministas.

Partiendo de la obra del sociólogo Edwin Sutherland sobre la delincuencia de cuello blanco, en la que demostró que la criminalidad estaba presente en todos los estratos de la sociedad, vamos a realizar una comparación entre este primer tipo de criminalidad y la criminalidad convencional desde una perspectiva de género. Por ello, hemos tenido en consideración como el género y la clase social, se convierten en ejes de discriminación, los cuales van a ser altamente determinantes durante el transcurso vital femenino.

- ✓ Palabras claves: Género, Clase social, Criminalidad convencional, Criminalidad de cuello blanco.

SUMMARY.

Through this work, it is intended to make a journey through the history of female crime, to learn how traditional criminological theories have been developed, which have been cataloged on numerous occasions as misogynists by various female criminologists.

Considering the work of the sociologist Edwin Sutherland about white-collar crime, in which he showed that crime was present in all strata of society, we are going to make a comparison between this first type of criminality and conventional criminality from a gender perspective.

For this reason, we have taken into consideration how gender and social class become axes of discrimination, which are going to be highly determinant during the female life course.

- ✓ Keywords: Gender, Social Class, Conventional Criminality, White Collar Crime.

INTRODUCCIÓN.

La criminalidad femenina ha permanecido en la periferia del conocimiento criminológico, ya fuese por su supuesta “irrelevancia numérica” o simplemente porque ha sido un ámbito de criminalidad que no ha suscitado agitación en la ciudadanía por su escasa peligrosidad social. A pesar de ello, las reglas de Bangkok¹ instan a los Estados a aproximarse empíricamente a la criminalidad femenina promoviendo investigaciones sobre este campo delictual. Con esta iniciativa, se pretende identificar los motivos que han provocado que las representantes de esta parcela criminal entren en contacto con el sistema policial y judicial, así como determinar las características de este colectivo, las tipologías delictivas y las consecuencias derivadas de su encarcelamiento.

Teniendo en cuenta esta recomendación, vamos a investigar sobre un campo de criminalidad que ya fue puesto de relieve por el prestigioso sociólogo estadounidense, Edwin Sutherland, en el siglo XX. Su tesis desafió las teorías criminológicas imperantes en la época, llegando a demostrar que el fenómeno delictivo no estaba ausente en ninguna capa social.

A pesar de la aportación innovadora, su teoría fue marcadamente masculinista, pues no tuvo en cuenta la posible participación o autoría femenina en esta creciente fenomenología criminal. Por ello, tomando como referencia su obra *White Collar Crime*, vamos a realizar una comparación entre la criminalidad convencional y la criminalidad de cuello blanco desde una perspectiva de género.

Como se desprende de la obra citada en el párrafo anterior, la clase social es un factor generador en sí mismo de discriminación, el cual se verá reforzado por otro elemento altamente determinante en el trayecto vital de todo ser humano, es decir, el género. Ambos se constituirán como ejes opresivos y discriminatorios que incidirán decisivamente en la criminalidad femenina, como podremos observar a lo largo de este estudio.

¹Las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, popularmente conocidas como las reglas de Bangkok, fueron aprobadas en diciembre de 2010.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.

La elección del tema sobre el ámbito de la criminalidad femenina viene motivada por la necesidad de profundizar en este olvidado e invisible campo criminal. Puesto que tras la revisión bibliográfica realizada para este trabajo fin de máster, hemos podido comprobar que aún a día de hoy existen diversas limitaciones en cuanto a número de investigaciones y el tratamiento académico que reciben las mismas.

Por un lado, los estudiosos de la criminología siguen centrando su atención principalmente en la figura del hombre delincuente dejando al margen la realidad de la criminalidad femenina, ignorando con ello las causas que la generan, y cómo la variable género influye directamente sobre ésta. A pesar de que las cifras de criminalidad femenina son reducidas, y quizás su “irrelevancia numérica” no suscite un amplio despliegue de las medidas judiciales y penitenciarias, es necesario tener conocimiento sobre ella para poder abordarla de una manera individualizada, no cayendo en la tradicional extrapolación de datos, provocando con ello que la criminalidad femenina sea entendida y explicada en claves masculinas. Además las teorías criminales responden al espacio y tiempo histórico durante el cual han sido elaboradas, lo que hace que les sea difícil escapar del sistema patriarcal, llegando a ser descatalogadas por su fuerte lectura misógina, ya que atribuían mayor importancia a la desviación del estereotipo femenino que al hecho delictivo en cuestión.

Actualmente está en pleno auge un campo criminal que durante décadas ha sido liderado por hombres, es decir, la criminalidad de cuello blanco, puesto que tradicionalmente, han sido ellos los que han ocupado los puestos de mayor responsabilidad en la esfera pública. Pese a ello, en los últimos años también está cobrando especial importancia el colectivo femenino en este sector, suscitando con ello la necesidad de investigar sobre esta esfera delictual bajo el enfoque de género. El objetivo de esta investigación es conocer las causas delictuales para prevenir este tipo de delitos, así como conocer como el género y la clase social son determinantes, tanto en las viejas como nuevas formas de criminalidad.

Especialmente para los criminólogos y las criminólogas es importante ahondar en el estudio de la criminalidad teniendo en cuenta la perspectiva de género, porque solo de esa manera podrán obtener un verdadero conocimiento empírico dejando atrás los sesgos y los estereotipos que distorsionan la realidad.

HIPÓTESIS.

- El género y la clase social van a ser dos factores a tener en cuenta por el impacto que pueden tener a la hora de entrar a formar parte del mundo delincuencial.
- Las mujeres también tienen capacidad criminal, aunque sus motivaciones sean distintas a la de los hombres, debido a que la delincuencia de éstas es funcional y resultado de un proceso de socialización diferencial.
- Las tipologías delictivas convencionales difieren de las de criminalidad de cuello blanco, ya que sus motivaciones son distintas, entrando especialmente en juego los dos factores citados anteriormente.
- En la esfera de criminalidad de cuello blanco existe una mayor coautoría entre los miembros de la pareja que en la delincuencia convencional.
- La teoría del amor es utilizada por las victimarias de cuello blanco para eludir su responsabilidad criminal.
- Las delincuentes de cuello blanco al cumplir con el rol de feminidad impuesto por la sociedad patriarcal, reciben menor reproche social que las delincuentes convencionales.
- La maquinaria legislativa y judicial se ceban con las victimarias convencionales, mientras que es bastante flexible e incluso benigna con las delincuentes de cuello blanco.
- El mayor poder adquisitivo y las relaciones con altas autoridades, favorece la impunidad de los delincuentes y las delincuentes de cuello blanco, elemento al que no pueden acceder los representantes y las representantes de la delincuencia convencional por la escasez de recursos.
- El seguimiento y la condena mediática es mayor para las delincuentes y los delincuentes de cuello blanco, al pertenecer a la esfera pública, la cual está sujeta a la opinión de la ciudadanía. Por el contrario, los delitos convencionales suelen pasar mayormente desapercibidos por los medios de comunicación.

OBJETIVO GENERAL.

- Aproximarnos a la criminalidad femenina de cuello blanco, la cual es una parcela de criminalidad en la que queda mucho por explorar, puesto que es un fenómeno bastante reciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Conocer el impacto del sistema patriarcal en la ciencia criminológica y penal.
- Contrastar cómo influyen el género y la clase social en las motivaciones criminales.
- Investigar sobre la delincuencia convencional y la delincuencia de cuello blanco desde una perspectiva de género, estableciendo las similitudes y diferencias entre ellas.
- Identificar las estrategias penales utilizadas por las delincuentes de cuello blanco para eludir la responsabilidad criminal.
- Revelar el grado de impunidad de la criminalidad de cuello blanco frente a la criminalidad convencional.
- Analizar el impacto mediático sobre la criminalidad de cuello blanco.

METODOLOGÍA.

Si partimos de la concepción de que la ciencia es una forma de producir conocimiento, también debemos tener en cuenta que ésta responde a los intereses políticos y sociales de un determinado tiempo y espacio histórico (Keller, 2001; González, 2004). Por tanto, se suscita el debate sobre la presumible objetividad e imparcialidad que tradicionalmente se le ha asignado.

Históricamente el que ha ostentado el poder ha sido el sistema patriarcal, el cual utilizó la producción de conocimiento androcéntrico como uno de sus mayores aliados. Al frente de esta institución se encontraba el colectivo masculino encargándose de elaborar el conocimiento “científico”, y ¿por qué va entrecomillado? Porque no puede ser catalogado como científico un conocimiento que durante décadas no ha tenido en cuenta al 50% de la población restante, es decir, a las mujeres. De ahí que el poder intrínseco del conocimiento siempre haya estado en manos de los hombres, y por ende, se ha tendido a explicar todos los fenómenos desde una visión masculina. Como consecuencia de ello, podemos afirmar que “el conocimiento es parte del poder y el poder parte del conocimiento” (González, 2004, p.176).

Se puede llegar a hablar sobre una historia robada, debido a que no será hasta la década de los sesenta del siglo XX cuando gracias al movimiento feminista se empiece a reconstruir la historia, teniendo en cuenta no solo las aportaciones femeninas, sino

¿Víctimas o victimarias?

también las interrelaciones entre los dos sexos. Este cambio también se vio propulsado por otros movimientos antisistema, que repudiaban el modelo de conocimiento hegemónico y que abogaban por un modelo alternativo. Sandra Harding, reconocida feminista, aportó la siguiente definición sobre ciencia:

Son productos del pensamiento que llevan la marca de sus creadores colectivos o individuales y, a su vez, los creadores están marcados de forma característica por su género, clase social, raza y cultura (Harding, 1996, p.15).

El modelo hegemónico de conocimiento alberga las clásicas dicotomías de hombre/mujer, cultura/naturaleza, etc., las cuales, han sido discutidas en el seno del feminismo, al encerrar la dominación en sí mismas, dado que son excluyentes (Keller, 2001). Este modelo apostaría por la generalización, tomando como marco de referencia al modelo dominante, es decir, al masculino. Elaborando leyes universales que no tendrían en cuenta las particularidades ni las subjetividades del objeto de estudio. En consecuencia, se hace necesario apostar por un modelo de ciencia alternativo, que tenga en cuenta no solo las particularidades de los fenómenos a investigar, sino además la subjetividad que incorpora el propio investigador o investigadora a la investigación (Harding, 1987).

Uno de los objetivos del movimiento feminista era incluir el género como categoría de análisis teniendo en cuenta la interseccionalidad, ya que todo sujeto/a de estudio puede verse atravesado/a por otras variables como, por ejemplo, clase social, raza/etnia, cultura, entre otras (Harding, 1987). De la misma manera, abogaban por un cambio epistemológico, adoptando una actitud crítica ante el conocimiento, propiciando no solo la incorporación de las mujeres a la comunidad científica, sino también destacando la participación y la experiencia femenina a lo largo de la historia.

Una vez realizada la introducción sobre los modelos de conocimiento, nos vamos a centrar en la metodología del trabajo que nos atañe.

A la hora de realizar un trabajo de investigación es especialmente importante llevar a cabo un procedimiento metódico, que nos permita alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto (López, 2002).

En primer lugar, se ha procedido a la definición del problema de estudio y posteriormente, hemos realizado una revisión bibliográfica, consultando el mayor número de producciones científicas que versan sobre nuestro objeto de interés, ya sean

¿Víctimas o victimarias?

tesis doctorales, revistas científicas, jurisprudencia, noticias o libros de autores o autoras que cuentan con una larga trayectoria profesional. Una vez realizado el trabajo de recopilación de información, se llevó a cabo un análisis del contenido de los diversos documentos que fueron previamente consultados, los cuales fueron seleccionados por la gran riqueza que podían proporcionar a nuestra investigación.

El análisis de contenido es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos,... el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social(Andreu, 2000, p. 2).

Como se ha comentado en líneas anteriores, el análisis de contenido contempla como instrumento de recogida de información, la lectura científica. Una vez realizada la lectura correspondiente, se procedió a la codificación y posterior clasificación de la información en diversas temáticas, comprobando en todo momento la fiabilidad de las fuentes. Para finalizar el proceso, se tuvo en cuenta la inferencia, es decir, aquellas conclusiones que pueden extraerse de los documentos consultados (Andreu, 2000).

De manera particular, hemos utilizado un análisis de contenido cualitativo, porque no solo nos hemos ceñido a la interpretación manifiesta del contenido de los documentos analizados, sino que además hemos pretendido profundizar en el contenido latente y el contexto social en el que se ha desarrollado el texto que contiene el mensaje (Andreu, 2000).

Para realizar una investigación más completa, hemos recurrido a la metodología cuantitativa, a través de la consulta de fuentes estadísticas proporcionadas por instituciones oficiales como, por ejemplo, Instituciones Penitenciarias o el Instituto Nacional de Estadística, cuya interpretación se hará de manera conjunta con los documentos cualitativos. Solo de esta manera podremos acercarnos de una forma más exhaustiva a nuestro objeto de estudio.

CAPÍTULO I. LA CRIMINALIDAD FEMENINA: EL ASUNTO PENDIENTE DE LA CIENCIA CRIMINOLÓGICA.

La criminología surgió como disciplina científica a mediados del siglo XIX, con la misión de ofrecer conocimientos empíricos sobre el ámbito de la criminalidad en general y de la persona delincuente en particular.

Desde sus inicios, los estudios criminológicos se centraron en la figura del hombre delincuente, obviando cualquier apreciación sobre la criminalidad femenina. Como consecuencia de la separación de la esfera pública de la privada y la confinación del colectivo femenino a esta última, las mujeres fueron construyendo su identidad sobre la institución del matrimonio y la maternidad (Nash, 2004), encontrándose con diversos obstáculos para poder formar parte de la esfera criminal. Debido a los planteamientos patriarcales y los moldes de la feminidad configurados por éste, las mujeres eran comúnmente contempladas como víctimas, obviando la posibilidad de que albergaran en su interior cualquier instinto o capacidad criminal (Acale y Gómez, 2015).

Teniendo en cuenta la dicotomía naturaleza/cultura, las mujeres habían sido relegadas al espacio privado por su naturaleza y capacidad reproductiva, mientras que el colectivo masculino se alzaba en la cúspide de la esfera pública y era el encargado de custodiar la batuta de la sabiduría, la cual adolecía de ser marcadamente androcéntrica (Stolcke, 1992). La irrupción del movimiento feminista, a mediados del siglo XX, trajo consigo una revolución en diversas áreas del conocimiento, entre las cuales se encontraba el criminológico.

Hablamos del surgimiento de una criminología feminista, cuyas exponentes no tardaron en remarcar el carácter misógino y androcéntrico de las teorías criminológicas tradicionales, (Daly y Chesney-Lind, 1988) reivindicando la participación de las mujeres como creadoras de conocimiento científico, además de reflejarla capacidad criminal de éstas, con la intención de paliar el estereotipo de víctimas que siempre ha acompañado al colectivo femenino por su supuesta inferioridad (García, 1995 cit. por Sánchez, 2004). A partir de este momento, el estudio de la criminalidad dará un giro significativo al introducir el género como categoría de análisis.

A pesar de los esfuerzos de las corrientes feministas por resaltar la realidad femenina en las distintas áreas de la sociedad y por consiguiente, en la esfera criminal,

¿Víctimas o victimarias?

el conocimiento que tenemos sobre ésta sigue siendo muy limitado, pues la criminalidad femenina aún a día de hoy no ha sido contemplada como una problemática social.

En líneas anteriores, se ha expresado que en la producción de conocimiento científico siempre se ha tomado como “unidad de medida” los parámetros masculinos (Sánchez, 2004), igualmente sucedió en los estudios de la criminalidad donde solo interesaba descifrar la identidad del hombre delincuente y conocer la etiología de su comportamiento para prevenirlo. Al estar la esfera delictual reservada particularmente al colectivo masculino, los escasos supuestos de criminalidad femenina eran explicados en “claves masculinas”, es decir, se produjo una extrapolación de datos, perpetuando con ello el modelo androcéntrico de conocimiento, el cual se basaba en meras generalizaciones y excluía cualquier particularidad por significativa que fuese. Esta falta de interés tomaba como justificación la premisa de que los hombres siempre han cometido más delitos que las mujeres a lo largo de la historia (Acale y Gómez, 2015).

Llegadas y llegados a este punto nos debemos formular las siguientes preguntas: ¿por qué las mujeres delinquen menos que los hombres?, ¿no tienen capacidad criminal?, ¿solo son partícipes del terreno de la criminalidad desde un plano victimal?

Si analizamos el recorrido de la historia de la criminalidad podemos observar que la criminalidad femenina siempre ha sido notablemente más reducida que la masculina. Ya en el siglo XIX Adolphe Quetelet, reconocido estadístico de la época, demostró en su obra *La física social* que la criminalidad femenina era significativamente inferior a la masculina en una proporción de 1 a 6 respectivamente (Quetelet, 1835, cit. por Lima, 1988). Esta desproporción es visible aún en el siglo XXI, pues si recurrimos a estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE) en el año 2015 las mujeres cometieron 38.147 delitos mientras que los hombres realizaron 250.609². Dicha desproporción también es constatable en el ámbito penitenciario, pues el año 2016 se saldó con 55.141 hombres privados de libertad y 4.448 mujeres, cuyo porcentaje es de 92,54% y 7,46% respectivamente³.

²INE. (2015). Estadística de condenados: Adultos. Año 2015. Delitos según sexo. Recuperado: <http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t18/p466/a2015/10/&file=01009.px>.

³ Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. (2016). Distribución de la población reclusa por sexo. Recuperado:

¿Víctimas o victimarias?

En el siglo XIX algunos criminólogos empezaron a tomar conciencia e investigar sobre esta invisibilizada realidad. Cabe resaltar que los primeros estudiosos que se interesaron por el tema, lo hicieron de una forma muy particular, ya que elaboraron teorías explicativas con un fuerte contenido misógino (Lima, 1988), otorgando mayor importancia a la desviación de la mujer del rol asignado por la sociedad patriarcal, es decir, al canon de feminidad y la ética del cuidado, que al propio hecho delictivo (Bergalli y Bodelón, 1992; Fernández, 1993).

Cesare Lombroso, considerado como el padre de la criminología, expresaba en su obra *L'Uomo delinquente* (1876), que el hombre delincuente era un ser atávico que no había terminado de evolucionar y que se había quedado anclado en un estadio anterior, asimilándose más a un animal que a un ser humano (Santos y Acero, 1994; Acale y Gómez, 2015). Por tanto, la menor criminalidad femenina invitaba a reflexionar que las mujeres eran menos atávicas que los hombres y por ende, se les circunscribía un aura de superioridad. Esto era algo inadmisibile en la época, provocando que el famoso autor reconstruyera su teoría. Será en su obra *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* (1892)⁴, donde defiende la hipótesis de que las mujeres delinquen menos porque son inferiores a los hombres; “El hecho de ser delincuente la convertiría no como al hombre en un pseudo ser humano sino en una especie de animal más que extraño” (Santos y Acero, 1994, p. 196).

Lombroso y Ferrero (1898) llegaron a enunciar que las mujeres delincuentes eran un “doble monstruo” por ser mujeres y delincuentes, ya que habían cometido un hecho delictivo que las masculinizaba y las desviaba de la feminidad.

En el plano psicológico hay que destacar a Sigmund Freud, el cual a través de su teoría del *Complejo de Edipo*, postulaba que las delincuentes presentaban mayor envidia de pene que aquellas que no lo eran, provocando el reproche de la niñas a sus madres por la carencia de pene, hasta llegar a desvincularse de ellas entrando en un proceso de masculinización, lo cual aumentaba la probabilidad de que cometieran actos desviados (Freud, 1905).

Existían numerosas teorías que relacionaban directamente las características biológicas de las mujeres con una posible predisposición a cometer actos delictivos, por

<http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=2016&mm=12&tm=GENE&tm2=GENE>.

⁴ Lombroso, Cesare y Ferrero Guglielmo. (1892). *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, ed. Et al, 2009, Varesina (edición con estudio preliminar de Mary Gibson e Nicole Hahn Rafter).

¿Víctimas o victimarias?

ejemplo, las defendidas por Otto Pollak, Bugallo, Laqueur, los cuales llegaron a mantener que las mujeres en los periodos de mayor actividad hormonal eran más propensas a delinquir (Santos y Acero, 1994).

Todo ello derivó en la necesidad de corregir a todas aquellas mujeres que llevaran a cabo una conducta desviada, creándose instituciones lideradas principalmente por autoridades religiosas. Un ejemplo de ello, fue el surgimiento en el siglo XVII de las casas galera, donde eran recluidas aquellas mujeres que estaban necesitadas de tutela moral por llevar una vida de desacato y desviación desde el punto de vista católico (Galindo, 2002). Las casas galera dieron paso a las casas de corrección que llegaron a consolidarse durante el siglo XIX, donde cobró especial sentido la pena marital:

El poder del marido era amplio, pues no solo determinaba la duración de la pena sino que además, era él, quien con su criterio dotaba de contenido a los elementos normativos completamente indeterminados que configuraban dicha figura. Además, estaba facultado para someterla a amonestación y a castigarla moderadamente aunque no resultaran ciertos los criterios de su queja y además, si lo creía conveniente, la llevaba ante el alcalde para que la reprendiera (Acale, 2006, p. 46)

Concepción Arenal también hizo especial hincapié sobre la delincuencia femenina a través de una visión dicotómica entre delito/pecado y pena/penitencia (Acale y Gómez, 2015). En este sentido, la escritora española señalaba:

Todas estáis igualmente necesitadas de que una voz amiga, pero severa, os explique en qué faltasteis, por qué sois castigadas, y cómo podéis borrar las huellas de vuestra falta recibiendo la pena como una penitencia merecida (Arenal, 1869, p. 229).

No será hasta 1931, cuando gracias a las propuestas de Victoria Kent⁵, siendo la primera mujer que ocupara el cargo de Directora General de Prisiones, se desligaran definitivamente las autoridades religiosas del sistema penitenciario.

Como es perceptible las mujeres han sufrido a lo largo de sus vidas una fuerte represión social para acallar cualquier instinto desviado o criminal que pudiera surgir en su interior. El patriarcado encontró en los agentes socializadores (familia, escuela, grupo de iguales, medios de difusión de masas...) a sus mejores aliados para ejercer el control sobre este colectivo (Miralles, 1983). En este sentido, podemos hablar de un control social informal que desde el inicio del ciclo vital les va a ir pautando cuales son las normas de comportamiento, valores, costumbres, etc. que deben de interiorizar y cumplir por el simple hecho de ser mujeres.

⁵Historia de Mujeres. Recuperado: <http://www.mujeresenlahistoria.com/2014/01/la-primera-abogada-victoria-kent-1889.html>.

¿Víctimas o victimarias?

De aquí que la mujer en tanto adquiere las características de su rol de género deba ser susceptible de protección, mientras que los hombres por las mismas causas son merecedores de una mayor libertad. Las mujeres delincuentes son aquellas que no han sido contenidas por los sistemas informales de control (Santos y Acero, 1994, p. 204).

Una hipótesis que puede dar respuesta al menor índice de criminalidad femenina está resumida en la siguiente cita:

Porque la estructura patriarcal ha relegado a la mujer a permanecer en el ámbito de lo privado, quieta, a la sombra del hombre del que en cada momento dependía, según su condición de hija o de esposa: el padre y/o el marido (Zaffaroni, 2009, p.25).

Las mujeres durante su trayectoria vital van a verse envueltas en una espiral de represión mucho más rígida que los hombres, ya que en primer lugar, estarán bajo la tutela paterna para posteriormente quedar sujetas a la marital. Dentro del sistema patriarcal será el colectivo masculino el encargado de custodiar y tutelar a las mujeres, no haciéndose necesaria una intervención prioritaria del derecho penal sobre éstas. Inversamente, ellos sí quedarían sujetos al control penal:

El poder patriarcal controla a más de la mitad de la población: a las mujeres, los niños y los ancianos. Por ello, el poder punitivo se ocupa preferentemente de controlar a los varones jóvenes y adultos, o sea, controla a los controladores (Zaffaroni cit. por Birgin, 2000, p.25).

Por lo tanto, aquella mujer que decidiera desviarse del rol de género asignado y participara en la comisión de un delito, sufriría un mayor reproche social que si de un hombre se tratase, pues se ha desviado de la feminidad, de la ética del cuidado y de los valores que desde la infancia se han esforzado por inculcarle, envolviéndola en un aura de estigmatización para evitar que otras mujeres reproduzcan sus pasos (Larrauri, 1994).

A pesar de los avances liderados por el movimiento feminista y la incorporación femenina a esferas sociales de las que habían sido excluidas durante décadas, no ha propiciado que las cifras de delincuencia femenina se equiparen a la masculina. Quedando desmontada la hipótesis de la famosa feminista Freda Adler, la cual siguiendo la teoría de la liberación femenina, defendía la hipótesis de que una mayor incorporación de las mujeres a la esfera pública iba a provocar el incremento de las tasas de criminalidad, al tener a su alcance mayores oportunidades para delinquir (Adler, 1976). Por el contrario, como se ha destacado aunque no se haya producido una equiparación entre las cifras de delincuencia masculina y femenina, sí se ha producido

¿Víctimas o victimarias?

un reducido incremento de esta última, diversificándose los tipos delictuales cometidos por las representantes de este colectivo (Acale y Gómez, 2015).

A pesar de ello, primaria aún a día de hoy la teoría de la asociación diferencial, que defiende que la mayor presencia femenina en el espacio doméstico/ privado y el fuerte control social informal que reciben, hace que se vean menos influenciadas por comportamientos desviados o delictivos, los cuales se desarrollan principalmente en espacios ajenos a éstas, encontrando mayores restricciones a la hora de iniciar o mantener una carrera criminal (Sánchez, 2004).

Para finalizar el capítulo, podemos afirmar que el género va a ser decisivo a lo largo de todo el ciclo vital femenino, siendo especialmente influyente tanto a la hora de iniciar como mantener una carrera criminal, así como para ser víctima de un delito. No obstante ¿qué sucede con aquellas delincuentes que a pesar de haber cometido un delito, no renuncian al estereotipo de feminidad? Esta pregunta será contestada a lo largo de la investigación.

CAPÍTULO II. APROXIMACIÓN TEÓRICA: DELITOS DE CUELLO BLANCO.

Nuestro trabajo está orientado a investigar sobre un campo delictual que está en continuo crecimiento, haciendo necesario conocer cuando surge la preocupación por esta nueva fenomenología, es decir, la delincuencia de cuello blanco.

Edwin Sutherland fue el encargado de poner en tela de juicio las teorías criminológicas imperantes en el siglo XX, al establecer un nuevo horizonte de investigación que hasta el momento no había gozado de interés por la comunidad científica. Este reconocido sociólogo, logró asociar dos elementos cuya vinculación era impensable en la época, criminalidad y clase social alta, logrando tambalear con ello la tradicional ecuación de pobreza y criminalidad, puesto que hasta el momento el crimen había sido considerado desde una perspectiva socioeconómica, patrimonio intrínseco de las clases sociales más desfavorecidas (Virgolini, 2004).

La mirada de los profesionales de la criminología era considerablemente sesgada, pues no era lo mismo hacer frente a individuos que pertenecían a estratos sociales golpeados por la pobreza, que lidiar con representantes de las capas sociales más altas, que a priori no estaban bajo la mirada acusadora de los sistemas sociales ni judiciales, pues al gozar de una posición social privilegiada se daba por sentado que estaban exentos de patologías o motivaciones que los llevaran a ejecutar actos desviados y/o delictivos.

Como se puede apreciar, la clase social no solo constituía una forma de discriminación sino que además era la encargada de separar dos esferas de criminalidad claramente diferenciados: criminalidad convencional y criminalidad de cuello blanco. Por un lado, la primera estaría relacionada con las clases sociales más desfavorecidas azotadas por la escasez de recursos, mientras que la segunda estaba configurada por una amplia gama de delitos protagonizados por miembros de las clases sociales más altas, los cuales gozaban de un alto poder adquisitivo y del estatus social y respetabilidad que de ello se derivaba. A pesar de ello, Sutherland añadió un elemento más a su teoría, ya que generalmente estos sujetos realizaban los actos delictivos en el ejercicio de su ocupación, pues ocupaban puestos de gran responsabilidad donde se tomaban decisiones especialmente importantes sobre asuntos económicos o políticos (Virgolini, 2004).

¿Víctimas o victimarias?

¿Qué llevaba a estos sujetos, a los que se les presuponía un comportamiento ejemplar, a cometer delitos?, ¿podemos hablar de una personalidad desviada?

En este sentido, podríamos hacer referencia al “psicodrama de Mergen”, que pone especial énfasis en el componente psíquico de este tipo de delincuentes (Burgos, 2015). Según esta teoría, los delincuentes de cuello blanco son altamente materialistas, hasta el punto de adoptar una conducta patológica que solo se vería satisfecha con la continua obtención de ganancias. Por otro lado, son egocéntricos y narcisistas, pues continuamente buscan el reconocimiento social, siendo especialmente relevante su motivación por el éxito. Asimismo, se caracterizan por no asumir la responsabilidad de sus actos, lo cual provoca que carezcan de remordimientos, conducta que se ve reforzada por la ausencia de reproche social. Son calificados como sujetos peligrosos porque son capaces de traspasar los límites de la ética haciendo uso de cualquier medio para lograr su único objetivo: satisfacer su afán de lucro (Avilés, et al. 2010; Burgos, 2015).

En otro sentido, existen diversas teorías de corte sociológico que también brindan una respuesta a la delincuencia de cuello blanco. Nos encontramos con la teoría de la asociación diferencial y la teoría de la anomia.

En primer lugar, la teoría de la asociación diferencial, elaborada por el propio Sutherland, propone que tanto el comportamiento delictivo como las técnicas necesarias para su comisión, son aprendidos mediante relaciones interpersonales a través de los procesos de comunicación, como si de un “contagio criminal” se tratara. Llegando a configurarse como motivación criminal cuando las interpretaciones contrarias a la ley prevalezcan sobre las que son favorables a ésta, siendo igual este proceso de aprendizaje tanto para la criminalidad convencional como para la criminalidad de cuello blanco (Sutherland, 1947 cit. por Virgolini, 2004).

En segundo lugar, la teoría de la anomia de Merton, heredero de Durkheim, sostiene que la criminalidad puede explicarse en función de la contradicción que surge en el interior del sujeto entre los objetivos a alcanzar y los medios legítimos a los que puede acceder para conseguirlos. En el supuesto de no tener a su disposición medios legítimos tendría que recurrir a los ilegítimos sucumbiendo a la desviación. En esta línea, Merton realizó la siguiente clasificación de conductas: conforme, ritual, retraído, rebelde e innovador, haciendo alusión en este último caso a los delincuentes de cuello

¿Víctimas o victimarias?

blanco. Merton consideraba a la delincuencia de cuello blanco como una desviación innovadora, en el sentido de que los sujetos se adherían al fin social dominante, es decir, al éxito económico, sin interiorizar las normas que determinan los medios y las modalidades para conseguirlo (Burgos, 2015).

Todo ello pone de relieve la preocupación de Sutherland por investigar este nuevo escenario, pues es un tema bastante complejo y ambiguo. Por un lado, se estaba abriendo un nuevo horizonte de criminalidad que había pasado desapercibido por la criminología y por otro, era un terreno resbaladizo puesto que se estaba poniendo bajo la lupa a las altas autoridades públicas, económicas y políticas que mantenían una estrecha relación con las instituciones judiciales, lo cual favorecía la corrupción y dificultaba su persecución.

Este tipo de infracciones no suscitan la intervención de los tribunales penales, no dan lugar a arrestos por policías uniformados, ni provocan penas de prisión, y las violaciones de la ley, que en general son sometidas a comisiones administrativas, tribunales civiles o de equidad, no son incluidas en las estadísticas corrientes de hechos criminales (Sutherland cit. por Virgolini, 2004, p. 47).

En resumidas cuentas, los delitos de cuello blanco sufrían sanciones menos estigmatizantes que los delitos convencionales, al aplicársele en mayor medida penas pecuniarias, sin obviar que las conductas realizadas por estos sujetos, que despertaban al mismo tiempo miedo y admiración en el conjunto de la sociedad, provocarían que el reproche social fuese menor o inexistente en comparación con la criminalidad convencional.

Es imprescindible tener en consideración dos aspectos: en primer lugar, que las autoridades judiciales suelen pertenecer a la misma clase social que los delincuentes de cuello blanco, lo cual provoca que el sentimiento de hostilidad hacia este grupo criminal sea muy reducido, y en segundo lugar, que los representantes de esta nueva esfera criminal disponen de los suficientes recursos para contratar a los mejores abogados y abogadas, lo cual garantizaría una exitosa defensa (Virgolini, 2004).

Para dar por concluido el capítulo, podemos destacar como el género y la clase social influyen incisivamente en esta cada vez más creciente forma de criminalidad. Por lo que es necesario ajustar los estudios criminológicos tradicionales a las nuevas exigencias de la realidad, porque a pesar de que Sutherland elaborara su teoría en claves

masculinistas, en las últimas décadas estamos asistiendo a un incremento de la criminalidad femenina de cuello blanco.

CAPÍTULO III. COMPARACIÓN ENTRE LAS TIPOLOGÍAS DELICTIVAS CONVENCIONALES Y LAS RELATIVAS A LA CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO.

1. Criminalidad convencional vs. Criminalidad de cuello blanco.

Tomando como marco de referencia la diferenciación que realizó nuestro sociólogo de referencia Edwin Sutherland entre criminalidad convencional y criminalidad de cuello blanco, vamos a analizar las tipologías delictivas más representativas de las dos esferas objeto de estudio.

En primer lugar, vamos a centrarnos en la criminalidad convencional para posteriormente analizar las tipologías delictuales de cuello blanco, incluyendo en nuestro análisis la perspectiva de género. En este sentido, la criminalidad convencional, tanto femenina como masculina estarían representadas principalmente por los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico y los delitos contra la salud pública; siendo de mayor preferencia los primeros para los delincuentes masculinos y los segundos para el colectivo femenino (Acale y Gómez, 2015). Nos vamos a detener en la criminalidad femenina y especialmente en las acciones delictivas que sean susceptibles de generar un abastecimiento económico.

Para finalizar, examinaremos las acciones delictivas llevadas a cabo por las delincuentes de cuello blanco, centrándonos en los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la Administración de Justicia y la Administración Pública.

1.1 Criminalidad convencional.

Delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico.

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico están tipificados a lo largo del Título XIII del Código Penal (en adelante CP).

¿Víctimas o victimarias?

El colectivo femenino suele llevar a cabo principalmente los delitos de hurto⁶, estafa⁷ o apropiación indebida⁸, pues son acciones delictivas que requieren más de astucia que de fuerza, siendo los robos con fuerza en las cosas o con violencia e intimidación, las modalidades preferidas por sus compañeros varones. Éstos por su parte, se sienten capacitados para asumir el riesgo de hacer frente a la resistencia que pudiera interponer la víctima o cualquier persona que intentara prestarle auxilio (Acale y Gómez, 2015).

Esta diferenciación propiciaría una visión estereotipada sobre la criminalidad, que tomaría como base el determinismo biológico, asumiendo que las mujeres generalmente son menos corpulentas que los hombres y por ende, deciden ejecutar delitos en los que no tengan que hacer frente a ninguna resistencia física, mientras que los hombres optarían por los delitos patrimoniales violentos, entre los que se encuentran los robos, ya que su presumible mayor fuerza física y corpulencia les permitiría hacer frente a cualquier imprevisto que pudiera poner en peligro la consumación del delito o la huida del lugar del crimen.

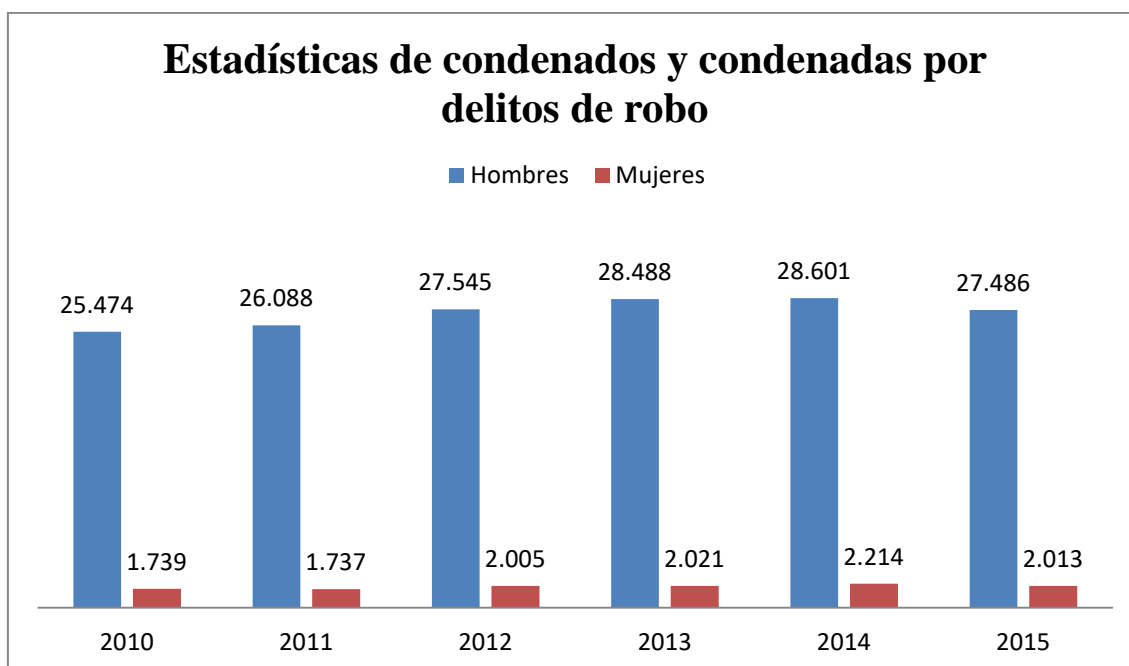
En la siguiente gráfica se puede comprobar las preferencias delictivas que hemos comentado previamente.

⁶El tipo básico del delito de hurto está regulado en el artículo 234 del CP: El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

⁷ Las estafas se encuentran tipificadas en el artículo 248 del CP: Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se consideran reos de estafa: **a)** Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro, **b)** Los que fabricaren, introdujeran, poseyeran o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo y **c)** Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

⁸ El tipo básico de la apropiación indebida está regulado en el artículo 253 del CP: Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

Gráfico 1



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Es preciso destacar, que las principales diferencias dentro de los delitos contra el patrimonio, se producen especialmente en los delitos de robo por las razones que hemos comentado en líneas anteriores, siendo el hurto el sustituto de esta modalidad para el grupo femenino. En los delitos de estafa la prevalencia femenina es superior a la masculina, teniendo una lectura marcadamente estereotipada por la tradicional habilidad engañosa de las mujeres. Por el contrario, en el resto de modalidades las cifras no son tan desproporcionadas entre ambos sexos (Acale y Gómez, 2015).

A tenor de lo expuesto, podemos afirmar que las mujeres suelen ejecutar mayoritariamente delitos patrimoniales no violentos, como se puede comprobar en la Sentencia de la Audiencia Provincial (en delante, SAP) de Asturias 61/2012, de 17 de abril [JUR/2012/1671149]. En cambio, la jurisprudencia también pone de manifiesto que en algunos supuestos pueden verse involucradas en un delito patrimonial violento al colaborar con el autor principal del delito que generalmente suele ser un hombre [SAP de Albacete 85/2010, de 17 de junio, JUR/2010/266691] o mujeres que debido a su síndrome de abstinencia a bebidas alcohólicas o drogas tóxicas deciden asumir el riesgo cometiendo un delito patrimonial violento [SAP de Cáceres 367/2011, de 28 de octubre, JUR/201/393604] (Acale y Gómez, 2015).

¿Víctimas o victimarias?

En este sentido, hay que tener en cuenta la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica (en adelante, LO) 1/2015, de 30 de marzo, por la cual desaparece la figura de las faltas en el CP pasando a ser reguladas como delitos leves o infracciones administrativas.

La finalidad de esta modificación ha sido reducir el elevado número de asuntos de menor gravedad que pueden ser solventados por la vía civil o administrativa, reservando al derecho penal, según el principio de última ratio, las acciones de mayor gravedad. Esta reforma es especialmente significativa para la delincuencia femenina, ya que las faltas de hurto, es decir, cuando la cuantía era inferior a 400 euros pasan a ser constitutivas de delito leve, imponiéndose una pena de multa de 1 a 3 meses siempre que no concurran las circunstancias del artículo 235 CP.

Esta pena pecuniaria repercutiría negativamente a aquellas mujeres que han tenido que recurrir a la delincuencia contra el patrimonio, y en particular, al hurto para obtener un efímero pero necesario ingreso económico debido a la situación de precariedad en la que se encuentran. La mayoría pertenecen a espacios poblacionales carentes de recursos, así como a minorías étnicas o migrantes, por tanto, no gozan de las mismas oportunidades para acceder a un trabajo dignamente remunerado.

Esto es debido a que en la mayoría de ocasiones carecen de formación académica o ésta es mínima, viéndose obligadas a desempeñar actividades laborales precarias y escasamente remuneradas en el mejor de los casos, dado que los altos índices de desempleo provoca que vivan en una situación de riesgo de exclusión social o bajo el umbral de la pobreza (Guardiá, 2014).

Siguiendo a Juana del Carpio (2015) imponer una pena de multa a personas que han tenido que recurrir a la vía ilícita para hacer frente a una situación de precariedad económica hace que sea una medida que plantea varios efectos negativos; pues en el caso de no poder hacer frente al pago de multa, el artículo 53 CP establece que cada dos cuotas no pagadas será equivalente a un día de privación de libertad. Sin embargo, al tratarse de un delito leve podrá sustituirse por una pena de localización permanente o de trabajos en beneficio de la comunidad (en adelante TBC), tras previa conformidad de la persona penada.

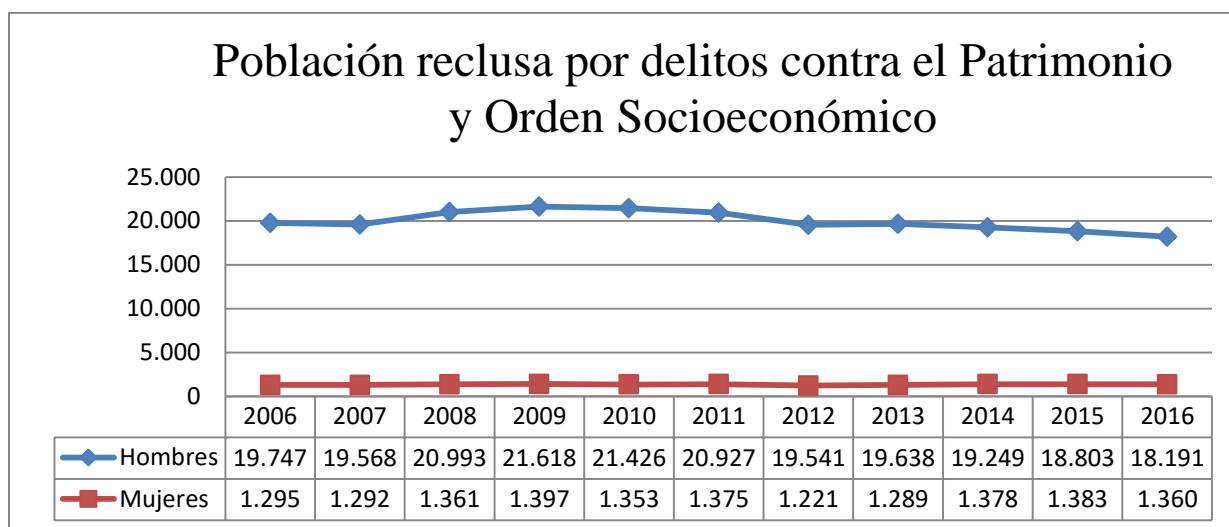
¿Víctimas o victimarias?

También hay que destacar el impacto de la reincidencia, así como de los antecedentes penales en este tipo de fenomenología criminal. En relación a la reincidencia, hay que tener presente lo dispuesto en el artículo 235 del CP, el cual establece que tendrán que cumplir una pena de prisión de 1 a 3 años aquellos o aquellas que “hubieran sido condenados ejecutoriamente al menos por tres delitos del mismo título, siempre y cuando sean de la misma naturaleza; en este sentido, no se tendrán en cuenta los antecedentes cancelados o que debieran serlo”. Con esta agravación de la delincuencia habitual se pretende combatir la multirreincidencia de este tipo de delitos. Esto ha provocado que lo que anteriormente era calificado como falta por su escasa entidad, pase a ser constitutivo de un delito leve que dejará de serlo en el momento de la aplicación de esta agravante por reincidencia (Del Carpio, 2015).

En segundo lugar, sobre los antecedentes penales hay que aclarar que antes de la reforma, las faltas no conllevaban antecedentes penales pero al ser elevadas a la categoría de delitos sí los comportan, teniendo que esperar seis meses para su cancelación, lo cual provoca un efecto significativamente negativo para el colectivo migrante, tanto para regular su situación o para favorecer las medidas de expulsión del territorio español (Guardiá, 2014).

Como se puede observar en la siguiente gráfica, las cifras relativas a la población reclusa por delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico son constantes. En relación a la reforma anteriormente citada, hay que afirmar que no disponemos de suficientes datos para realizar un comentario significativo sobre su impacto, pero a pesar de ello, podríamos plantear la siguiente hipótesis que podrá ser refutada con el paso de los años: la reforma introducida en el año 2015 conllevará un incremento de los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico.

Gráfico 2



Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico, como su propio nombre indica, tienen como finalidad la obtención de un abastecimiento económico, tanto para el colectivo masculino como para el femenino, siendo especialmente importante en el caso de estas últimas, ya que suelen tener a sus espaldas cargas familiares, provocando que vivan sumergidas en una situación de especial necesidad al no disponer de suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas, no encontrando una vía legítima para asegurar la supervivencia de su prole.

El género, es decir, la función de cuidado familiar tradicionalmente asignada al colectivo femenino y el cambio de roles experimentado en los últimos años debido al auge de familias monomarentales donde las mujeres han tenido que erigirse como únicas proveedoras económicas, ha provocado que éstas hayan tenido que buscar incesantemente alguna oportunidad en el mercado laboral. Estas oportunidades se han visto mermadas en numerosas ocasiones por las discriminaciones laborales y salariales donde también se une el factor relativo a la clase social, puesto que al pertenecer a una clase social baja en la que no han podido acceder a distintos recursos formativos junto a los estigmas de marginalización, provoca que constantemente se encuentren ante la necesidad de decidir emprender un camino delictivo al no encontrar otras alternativas.

¿Víctimas o victimarias?

Delitos contra la salud pública.

Dentro de los delitos contra la seguridad colectiva regulados en el Título XVII, Capítulo III, nos encontramos con los delitos contra la salud pública.

El tipo básico se encuentra regulado en el artículo 368 del CP y dispone lo siguiente:

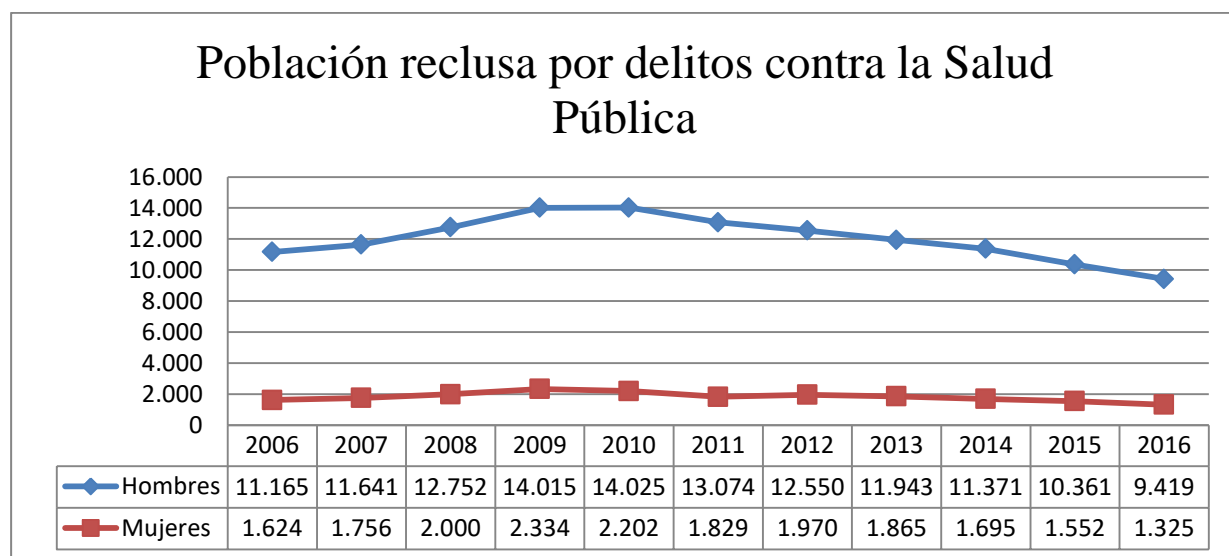
Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

Como es perceptible se trata de un tipo penal extenso y severamente represivo provocando con ello que las personas condenadas por estos delitos, lleguen a cumplir medidas privativas de libertad especialmente elevadas, comprendidas entre los tres y seis años de prisión. No pudiéndose aplicar a priori la suspensión de la pena contemplada en el artículo 80 del citado instrumento jurídico, que permite según resolución motivada de los jueces o tribunales suspender la pena cuando sea inferior a dos años.

Como veremos más adelante, la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, modificativa del CP de 1995, introduce un elemento bastante valioso, ya que, según las recomendaciones defendidas en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (en adelante TS), de 25 de octubre de 2005: “se puede reducir la pena cuando se traten de casos de escasa entidad siempre que no concurren las circunstancias recogidas en el artículo 369 y siguientes del instrumento jurídico”, tratándose de una oda al principio de proporcionalidad defendido por el marqués de Beccaria.

Se trata de una medida especialmente significativa desde la perspectiva de género, porque a pesar de que las cifras de criminalidad femenina son muy reducidas, un alto porcentaje de mujeres se encuentran con sus huesos en prisión por cometer un acto delictivo de estas características.

Gráfico 3



Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Como se puede observar en la gráfica, aproximadamente el 30 o 40% de la población reclusa femenina se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad por un delito contra la salud pública. ¿A qué se deben estos porcentajes tan elevados?

La etiología de estas acciones delictivas está íntimamente relacionada con la dependencia a sustancias tóxicas y la necesidad de obtener ingresos económicos tanto para el autoconsumo como para sobrevivir al estado de precariedad en la que viven inmersas, tratándose de una delincuencia funcional (Acale y Gómez, 2015).

A pesar de que un alto porcentaje de reclusas sí son consumidoras, otras por el contrario, no lo son y han tenido que recurrir a estas actividades ilícitas para combatir el estado de necesidad económica en la que se encuentran. Tanto el cambio de roles como el auge de familias monomarentales ha provocado que muchas mujeres hayan tenido que tomar el mando de la familia y ser las encargadas de traer a casa el sustento económico. Ante esta incesante presión y la necesidad de supervivencia, no hallan otra salida, encontrando en el campo delictual una rápida solución. Esto es debido a que con esta modalidad delictiva, se ofrece la posibilidad de generar ingresos económicos de una manera rápida y sin la necesidad de realizar grandes esfuerzos, hasta el punto de poder compatibilizarlo con sus tareas domésticas (Puente, 2012; Acale y Gómez, 2015).

¿Víctimas o victimarias?

Si nos remitimos al CP, el primer colectivo podría acogerse al artículo 20.2 para eximir su responsabilidad criminal:

El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

En el caso de no cumplir con los requisitos del artículo citado anteriormente, el artículo 21.2 contempla una circunstancia atenuante, cuando la actuación de la condenada se derive de su grave adicción a tales sustancias. No obstante, también se le puede aplicar la agravante de reincidencia (22.8 CP), ya que muchas de ellas reinciden debido a la necesidad de traficar para satisfacer su autoconsumo, en estos supuestos habrá que tener en cuenta el artículo 66.7:

Cuando concurren atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.

Centrándonos en el segundo colectivo, es decir, aquellas mujeres que recurren al tráfico de drogas para hacer frente a su estado de necesidad económica, cabe destacar que no pueden acogerse a tales circunstancias, encontrando en la reforma operada en el año 2010 un “bote salvavidas”, pues según el segundo párrafo del artículo 368 “los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado cuando se trate de un hecho de escasa entidad y teniendo en cuenta las circunstancias personales de la culpable”. Haciendo alusión a este supuesto, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿realmente son dignas de llevar a sus espaldas la etiqueta de delincuentes o son víctimas de un sistema que las engulle?

Sí, han cometido un acto que está tipificado como delito en un instrumento jurídico, pero ¿realmente gozan de otra alternativa? Son mujeres que viven bajo el umbral de la pobreza y que son azotadas por las desigualdades, no solo económicas sino también de género. Si recurrimos a la interpretación que realizó Merton sobre la teoría de la anomia, los individuos e individuos sucumben a la desviación cuando en su interior surge un conflicto entre los objetivos que se han propuesto conseguir y los

¿Víctimas o victimarias?

medios legítimos que tienen a su disposición, haciendo especial hincapié al lugar que ocupan dentro de la estratificación social.

Se trata de mujeres que son azotadas por la feminización de la pobreza, pues al pertenecer a una clase social baja no han gozado de las mismas oportunidades para prepararse profesionalmente y poder desempeñar un trabajo del que reciban a cambio un salario bien remunerado, independientemente de que las mujeres siempre han sufrido discriminaciones laborales, tanto a nivel salarial como contractual. A este caldo de cultivo le añadimos el gran número de personas que tienen a sus espaldas y que dependen de ellas, lo cual provoca que al no disponer de oportunidades legítimas a su alcance recurran al plano delictual.

Lo mismo ocurre cuando asumen la culpa por un delito que nunca cometieron, simplemente por el hecho de salvar del ingreso en prisión a un hijo/hija, cónyuge o con quien mantengan una relación análoga de afectividad (Acale y Gómez, 2015). Estos sentimientos de sacrificio y abnegación son producto de la socialización patriarcal que han recibido desde su más tierna infancia y que ha servido para salvar en más de una ocasión a sus compañeros varones de entrar en prisión, ¿hasta qué punto el sistema patriarcal se ceba con las mujeres para que los hombres salgan privilegiados a pesar de haber cometido un delito? Es una cuestión digna de reflexión.

Igualmente sucede en los supuestos donde las mujeres son utilizadas por las organizaciones criminales como el último “eslabón de la cadena”, puesto que al ser las encargadas de transportar las sustancias tóxicas, conocidas dentro de la jerga del narcotráfico como “mulas”, son más proclives a ser detectadas por los agentes policiales, ya sea en aeropuertos, estaciones de trenes o autobuses. Su misión es introducir la mercancía en otros países diferentes al suyo de origen, por ello la mayor parte de reclusas que están cumpliendo una pena privativa de libertad por un delito contra la salud pública son de nacionalidad extranjera (Puente, 2012; Acale y Gómez, 2015).

Son meros títeres de las cúpulas de las organizaciones criminales que están capitaneadas por hombres, los cuales no se exponen a realizar las tareas de transporte para no ser apresados, es decir, se cubren entre los miembros masculinos de la red criminal como si de una especie de “pacto entre hombres” se tratara para salir impunes cavando con ello la tumba de sus compañeras. Es importante tener en cuenta que

¿Víctimas o victimarias?

muchas de ellas sufren violencia por parte de sus compañeros y además suelen establecer relaciones sentimentales con los dirigentes de tales organizaciones (Cawley, 2013), lo que genera un sentimiento de dependencia y de abnegación digno del mito del “amor lo puede todo”, que posteriormente será analizado en otro capítulo.

Los sentimientos descritos anteriormente ya sea por abnegación, solidaridad o miedo a represalias provoca que cuando son arrestadas por la policía decidan no delatar a sus compañeros, no pudiendo acogerse a lo dispuesto en el artículo 376 del CP:

En los casos previstos en los artículos 361 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

Estos sentimientos juegan un papel especialmente importante en las madres, cónyuges, parejas o familiares que asumen el riesgo de introducir sustancias tóxicas en el interior de los centros penitenciarios para satisfacer el síndrome de abstinencia de la persona recluida. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la STS 904/2010 que recoge el recurso de casación derivado de la sentencia emitida por la Audiencia de Barcelona, Sección III dictada el 23 de febrero de 2009 condenando a nueve años de prisión a una madre como autora de un delito contra la salud pública por introducir hachís y heroína a su hijo toxicómano que se encontraba cumpliendo una pena privativa de libertad, aplicándose la agravante contemplada en el artículo 369.7 CP. Tras el recurso de casación, el TS falló lo siguiente: la progenitora es calificada como autora de un delito contra la salud pública concurriendo la atenuante “muy cualificada” mixta de parentesco del artículo 23 y aplicándose el art. 66 del CP se le reduce la pena a un año y seis meses de prisión; pudiéndose aplicar la suspensión de la pena al no tener antecedentes penales y ser la pena inferior a dos años.

Este solo es un ejemplo de muchos en los que madres, esposas o parejas ponen en riesgo su libertad para satisfacer las necesidades de la persona recluida, dado que el comportamiento solidario o de sacrificio por los demás es lo que se espera de ellas según las pautas patriarcales.

¿Víctimas o victimarias?

En definitiva, es un campo delictual en el que influyen especialmente los roles de género y las desigualdades estructurales y sociales que sufren las mujeres.

1.2 Criminalidad de cuello blanco.

Como se decía anteriormente, para hablar de criminalidad de cuello blanco hay que remitirse a Sutherland, pionero en el estudio de este tipo de criminalidad.

Sutherland llegó a definir al delito de cuello blanco como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y estatus social alto en el curso de su ocupación” (Sutherland cit. por Virgolini, 2004, p.46)

Con todo lo expuesto, demostró que las conductas criminales se desarrollaban en todas las capas y sectores sociales de manera aproximadamente proporcional. Sin embargo, la ley era aplicada de manera diferenciada según la posición social a la que perteneciera el infractor, visibilizando con ello que las estadísticas de criminalidad poseían altos índices de cifra negra pues no contemplaban los delitos de cuello blanco. Esto es debido a que muchos de estos criminales, no eran arrestados o perseguidos por su influencia política y económica o simplemente por la parcialidad de la ley ante los sectores socioeconómicos más altos (Virgolini, 2004). Esta impunidad entroncaba frontalmente con la fuerte represión que sufrían los autores de la criminalidad convencional, los cuales eran perseguidos ferozmente por las fuerzas policiales recibiendo condenas sumamente elevadas.

Sutherland se centró especialmente en los delincuentes de cuello blanco pero ¿qué sucede con las delincuentes de cuello blanco?, ¿qué tipologías delictivas cometen? En este apartado, nos vamos a centrar especialmente en las modalidades delictuales cometidas por las delincuentes de cuello blanco, que al igual que las delincuentes convencionales, han sido obviadas de los estudios criminológicos.

Se trata de mujeres, que a diferencia de las delincuentes convencionales, pertenecen a clases sociales altas, gozan de un elevado poder adquisitivo y además se valen de su ocupación para poder llevar a cabo sus acciones delictivas. En los últimos años, las cifras de delincuencia de cuello blanco han aumentado significativamente especialmente en el plano político y económico. A pesar de este hecho, un número considerable de infractores e infractoras han evitado el ingreso en prisión, debido al

¿Víctimas o victimarias?

poder de sus influencias o porque han podido contratar abogados/as de gran prestigio, siendo el número de reclusos y reclusas ínfimo de estas tipologías delictivas.

El sentimiento de impunidad sobre la delincuencia de cuello blanco suscita una fuerte preocupación, llegando a ocupar la corrupción una de las primeras posiciones en el ranking sobre las preocupaciones de la sociedad española, según el centro de investigaciones sociológicas.

La incorporación de las mujeres a nuevas esferas de la sociedad, especialmente al funcionariado y a puestos de responsabilidad política y económica, hace más proclive su participación en actos delictivos a través del ejercicio de su ocupación, por tanto, ¿cometen los delitos individualmente o en coautoría?, ¿realmente ocupan puestos donde se toman decisiones importantes o simplemente se dedican a cumplir órdenes de sus superiores varones? A continuación, analizaremos estas cuestiones.

Teniendo en cuenta tanto fuentes estadísticas como jurisprudenciales vamos a centrarnos especialmente en los delitos societarios, delitos de blanqueo de capitales y los delitos contra la Administración de Justicia y la Administración Pública.

Delitos societarios.

Los delitos societarios se encuentran tipificados en el capítulo XIII del Título XIII relativo a los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico comprendiendo los artículos 290 hasta el 297 del CP.

Lo que se pretende con la tipificación de estos delitos es paliar los abusos de poder o irregularidades que pudieran cometer los administradores o administradoras de una sociedad en perjuicio de ésta, de los socios o terceros. Por sociedad entendemos según lo dispuesto en el artículo 297 del CP lo siguiente:

Se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado.

En cuanto a las penas, hay que destacar que se puede aplicar una pena privativa de libertad y/o multa, no siendo las primeras muy elevadas, ya que lo máximo estipulado son tres años de prisión, contemplándose únicamente una agravación cuando se llegue a producir un perjuicio económico.

¿Víctimas o victimarias?

Un ejemplo claro de ello, es el de Concepción Dancausa, actualmente delegada del Gobierno de España de la Comunidad de Madrid, que está siendo investigada junto a quince personas más por un presunto delito societario por el caso de Mercamadrid S.A, la cual es una sociedad mixta en la que participaba el Ayuntamiento aproximadamente en un 50%⁹.

A tenor de ello, podemos determinar que ocupar una posición política de esta envergadura favorecería la comisión de este tipo de delitos. En este supuesto en cuestión se trataría de un delito en coautoría entre todos los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en el 2013, ya que según STS 655/2010, de 13 de julio y 696/2012, de 26 de septiembre, este tipo de delitos solo pueden ser cometidos por los administradores y administradoras de la sociedad, ya sean de hecho o de derecho. Por administrador/a de derecho, entendemos aquellas personas que llevan a cabo jurídicamente las funciones de la Administración mientras que los administradores/as de hecho, son aquellos o aquellas que aun careciendo de los requisitos exigidos por la legislación societaria tienen un verdadero poder de decisión dentro de la sociedad(Rives, 2014).

Estas acciones delictivas quedarían encuadradas dentro de los delitos de cuello blanco, ya que en primer lugar, se trata de individuos/as que han encontrado en su actividad laboral mayores oportunidades para llevar a cabo este tipo de actividad delictiva, sin obviar, que por la ocupación que tienen dentro de la sociedad se les presupone un aura de respetabilidad que se ve perpetuado por su alto poder adquisitivo.

Delito de blanqueo de capitales.

El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado dentro de los delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico, concretamente en el Capítulo XIV. Están encuadrados dentro de este Título porque las acciones de blanqueo atacan gravemente al orden socioeconómico. Por ello se pretende garantizar “un orden económico y social justo”, según lo establecido en el preámbulo de nuestra Constitución.

⁹Martiarena, Asier (10 de Mayo de 2017). La delegada del Gobierno en Madrid, imputada por delito societario. La Vanguardia. Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170510/422449805172/dancausa-delegada-gobierno-imputada-mercamadrid-delito-societario.html>.

¿Víctimas o victimarias?

La terminología utilizada, es decir, la de “blanqueo”, tiene su origen en los medios de comunicación, siendo progresivamente introducida en el ámbito económico y jurídico, hasta el punto de que la Real Academia Española (en adelante, RAE) contempla en la sexta acepción del verbo blanquear: “Ajustar a la legalidad fiscal el dinero negro” (Caparrós, 1998).

La actividad de blanqueo de capitales puede definirse como:

El fenómeno tanto que reconducción de ese capital, obtenido como consecuencia de delitos, al sistema económico financiero oficial, de tal forma que pueda incorporarse a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita y tributariamente correcta (Ruiz Vadillo cit. por Caparrós, 1998).

Se configura como un proceso por el que se ocultaría, o bien la existencia de ingresos o su origen ilícito, con la finalidad de simular su auténtica naturaleza haciendo parecer que son legítimos. Dentro de la jerga económica, el origen ilícito del dinero llevaría aparejado los conceptos de dinero sucio y dinero negro.

Cabe resaltar que aunque ambos conceptos suelen utilizarse de manera sinónima, existe una clara diferenciación entre ambos. En primer lugar, el dinero negro haría referencia aquel cuyo titular lo mantiene al margen de las instituciones estatales de control fiscal, quedando liberado del sometimiento de contribución a los gastos públicos impuestos por el sistema tributario mientras, que el dinero sucio es aquél que no solo es ocultado a los sistemas económicos oficiales, sino que además tiene su origen en una actividad ilícita (Virgolini, 2004). Sin embargo, hay que tener presente que no solo el dinero es objeto de blanqueo, ya que éste puede transformarse en bienes o servicios de los más variados (Caparrós, 1998).

El delito de blanqueo de capitales está tipificado en los artículos 301 al 303 del CP. El artículo 301 recoge el tipo básico:

El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del

¿Víctimas o victimarias?

establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

Por un lado, se pretende proteger el funcionamiento legal del sistema financiero, ya que la reintegración del dinero ilícito al circuito financiero legal provoca distorsiones en este último y por otro, la tutela de la Administración de Justicia, puesto que el encubrimiento de tales actividades dificultaría su persecución.

Se contempla como tipos agravados, la pertenencia a una organización criminal, especialmente si se trata de una entidad dedicada al tráfico de drogas (Artículos 301 y 302 CP) así como, cuando estas acciones fueran realizadas por “un empresario/a, intermediarios/as en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajadores/as sociales, docente o educador/a, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio” (Artículo 303 CP); puesto que en este último caso pueden ver facilitada la consumación de su acción delictiva por el cargo que ocupan.

Una vez que hemos realizado una introducción sobre el delito de blanqueo de capitales, es necesario aclarar su relación con el delito de receptación, ya que ambos comparten el Capítulo XIV del Título XIII del CP.

El delito de receptación estaría regulado en el artículo 298 del citado instrumento jurídico, siendo definido de la siguiente manera:

El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Esta acción delictiva comporta la previsión de un enriquecimiento propio así como favorecer que los autores de un delito contra el patrimonio y orden socioeconómico obtengan los beneficios derivados de éste. Es importante tener en cuenta que el autor o autora del delito de receptación, a pesar de tener conocimiento sobre la comisión de un delito contra el patrimonio y orden socioeconómico previo, no debe de haber intervenido en él, ni como autor/a ni como cómplice.

La reforma introducida por la LO 1/2015, de 30 de marzo, modificativa del CP, introduce un tipo agravado en el delito de receptación, elevando la pena de prisión de 1 a 3 años, especialmente “cuando se trate de bienes o efectos de especial protección o cuya sustracción de lugar a un delito contra el patrimonio de mayor gravedad”. Con esta

¿Víctimas o victimarias?

modificación se pretende “desincentivar tanto la sustracción de dichos bienes como su venta o tráfico ilícito”.

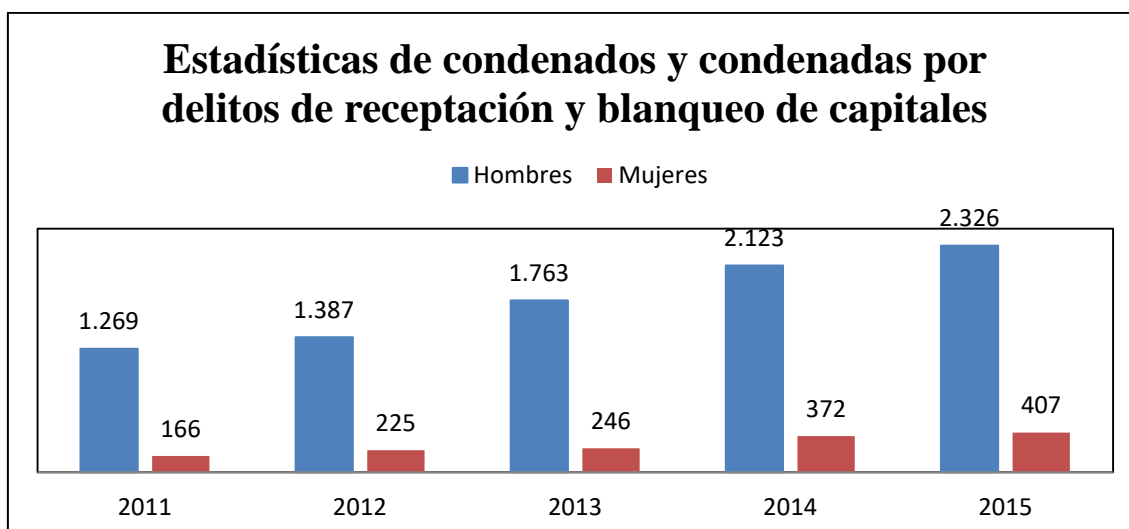
Según la sentencia del TS [JUR 2015,134175], las principales diferencias entre el delito de receptación y el delito de blanqueo de capitales son¹⁰:

- El delito de receptación requiere la ejecución de un delito previo contra el patrimonio y orden socioeconómico, mientras que el segundo no determina la naturaleza del delito precedente.
- En ambos delitos se debe de tener conocimiento del delito precedente, aunque en el delito de receptación es imprescindible que el autor del delito “no haya intervenido ni como autor ni como cómplice”, algo que no sucede en el delito de blanqueo de capitales, puesto que el autor de blanqueo puede ser asimismo el autor del delito que ha generado previamente la riqueza, es lo que se conoce como “autoblanqueo”.
- En el delito de blanqueo de capitales no se contempla específicamente como requisito el ánimo de lucro como sí lo hace el de receptación.

A continuación, en la siguiente gráfica podemos observar que estas tipologías delictivas van aumentando de manera gradual en los últimos años en ambos sexos.

¹⁰De la Parte Polanco, Maite (2016). “El encubrimiento como elemento determinante del blanqueo de capitales”. Legaltoday. Recuperado: <http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/el-encubrimiento-como-elemento-determinante-del-blanqueo-de-capitales>.

Gráfico 4



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En relación a la autoría, hay que mencionar que un significativo número de mujeres cometen este delito para blanquear el dinero que proviene de actividades ilícitas que llevan a cabo sus cónyuges, parejas o aquellas personas con quienes mantienen una relación análoga de afectividad. Según lo expuesto, hay que destacar varios casos mediáticos, entre los que se encuentra el de la famosa tonadillera Isabel Pantoja, condenada por un delito de blanqueo de capitales a dos años de prisión y pena de multa por ocultar el origen ilícito y blanquear el dinero de su entonces pareja Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella. Dentro de esta trama judicial, también fue condenada por el mismo delito a la ex esposa de Julián Muñoz, María Teresa Zaldívar a dos años y seis meses de prisión así como al pago de una elevada pena de multa¹¹.

Ambas mujeres tienen en común que han ocultado y blanqueado el dinero de la que entonces fuera su pareja, Julián Muñoz Palomo, cuya riqueza tenía un origen ilícito debido a las tramas de corrupción en la que estuvo envuelto durante años.

Asimismo dentro del plano político y de la trama Gürtel en particular, están imputadas por un presunto delito de blanqueo de capitales entre otros, Rosalía Iglesias¹², esposa de Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del Partido Popular, María del

¹¹Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. STS N°487/2014.

¹² Europa Press (2 de Septiembre de 2013). Embargan a Rosalía Iglesias una finca en Marbella y productos financieros. El Mundo.
Recuperado: <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/02/espana/1378124084.html>.

¿Víctimas o victimarias?

Carmen Rodríguez Quijano¹³, ex esposa de Francisco Correa y Teresa Gabarra, esposa de Alberto López¹⁴.

Ana Mato¹⁵ y Gema Matamoros también han sido investigadas dentro de esta trama de corrupción, sin embargo, no se les imputa un delito de blanqueo de capitales, sino que el juez ha contemplado para ellas una nueva figura como es la de “partícipe a título lucrativo” regulada en el artículo 122 del CP: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

A su vez, una de las últimas investigadas dentro de la esfera política por un delito de esta magnitud ha sido Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, ex presidente de la comunidad de Madrid¹⁶, el cual podría haber utilizado la empresa de su mujer destinada a la venta de obras de arte para blanquear dinero.

Un suceso que no ha tenido tanta trascendencia mediática pero que es revelador, no solo por la participación femenina, sino también por el cargo de autoridad pública que ostenta uno de los dos condenados varones, ha sido el contemplado en la sentencia nº 858/2013 de la 2ª Sala, de lo Penal, del TS del 19 de noviembre de 2013¹⁷.

Este caso hace referencia a dos parejas que se enriquecieron mediante el blanqueo de dinero derivado de la sustracción de envoltorios de drogas tóxicas que se encontraban bajo custodia en la jefatura de policía en la que trabajaba uno de los dos varones acusados. Ambas mujeres actuaron con pleno conocimiento de las actividades que estaban llevando a cabo sus parejas, siendo condenada la mujer del agente de policía como cómplice de un delito de robo continuado y un delito de blanqueo de capitales a una pena de prisión de un año y seis meses por el primero y cinco años por el

¹³ Europa Press (3 de Octubre de 2016). Quién es quién en el banquillo de los acusados en el juicio de la trama Gürtel. El Heraldo. Recuperado: <http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2016/10/02/quien-quien-banquillo-los-acusados-juicio-trama-gurtel-1090646-305.html>.

¹⁴ En febrero de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana procedió a emitir la sentencia sobre las irregularidades en las contrataciones de la feria Fitur, una de las piezas claves de la trama Gürtel, no obstante, las mujeres imputadas dentro de esta trama de corrupción objeto de nuestra investigación, aún están a la espera de recibir el dictamen judicial.

¹⁵ Pérez, Fernando (26 de Noviembre de 2014). Ana Mato y el PP se beneficiaron de los fondos delictivos de la red Gürtel. El País. Recuperado: https://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417003121_995645.html.

¹⁶ Romera, J. y Díaz, E. (8 de Mayo de 2017). La mujer de Ignacio González facturó 25 millones bajo sospecha de blanqueo. El economista.

Recuperado: <http://www.economista.es/economia/noticias/8342334/05/17/La-mujer-de-Ignacio-Gonzalez-facturo-25-millones-bajo-sospecha-de-blanqueo.html>.

¹⁷ Recuperado: <https://supremo.vlex.es/vid/ganancias-obtenidas-blanqueo-capitales-482236742>.

¿Víctimas o victimarias?

segundo, además de una pena pecuniaria. La otra acusada fue condenada como autora de un delito de blanqueo de capitales a una pena de dos años y seis meses de prisión, así como a una pena de multa.

Estos ejemplos jurisprudenciales verifican como un número considerable de mujeres se prestan a participar en un delito de blanqueo de capitales, cuyos delitos previos los han ejecutado sus parejas, cónyuges o con quienes mantienen una relación análoga de afectividad. Sin embargo, el ánimo de lucro no es un requisito exigible desde el tipo penal del blanqueo de capitales, aunque pudiera darse el supuesto de que sí existiera tal elemento. A tenor de ello, el artículo 301 del CP comprende las siguientes acciones dentro del tipo penal:

El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

De igual modo, uno de los elementos que se desprende del tipo básico es la acción encubridora que generalmente desarrolla el colectivo femenino, lo cual entorpecería la persecución de este tipo de delitos por el Estado.

El auge de esta tipología penal ha provocado que se ponga en funcionamiento una amplia batería de normas jurídicas para frenar su impacto en el circuito legal económico y financiero. Un ejemplo de ello es la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que toma como antecedente la preocupación sobre esta problemática en continuo auge desde la década de los ochenta.

Delitos contra la Administración de Justicia.

Los delitos contra la Administración de Justicia se encuentran tipificados dentro del Título XX del CP comprendidos entre los artículos 446 y 471 bis. El bien jurídico protegido, como su propio nombre indica, es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, cuyos principales representantes son los jueces y magistrados, los cuales deben velar por la independencia e imparcialidad de las instituciones judiciales.

¿Víctimas o victimarias?

Dentro de los delitos contra la Administración de Justicia encontramos una amplia lista de actividades ilícitas: prevaricación (Capítulo I), omisión de los deberes de impedir un delito (Capítulo II), encubrimiento (Capítulo III), realización arbitraria del propio derecho (Capítulo IV), acusación, denuncias falsas y simulación de delitos (Capítulo V), falso testimonio (Capítulo VI), obstrucción a la justicia y deslealtad profesional (Capítulo VII), quebrantamiento de condena (Capítulo VIII) y los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal (Capítulo IX).

Siguiendo la línea argumentativa sobre la delincuencia de cuello blanco, nos vamos a detener principalmente en el delito de encubrimiento por su prevalencia femenina.

El tipo básico está regulado en el artículo 451:

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

- Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.
- Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.
- Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
 - Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey o Reina, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o Princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos.
 - Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.

La función encubridora, como hemos podido observar, a lo largo del capítulo, suele cobrar especial interés dentro de la perspectiva de género debido a la alta prevalencia femenina, independientemente de si se trata de delincuencia convencional o de delincuencia de cuello blanco. Generalmente, es la figura femenina la que asume la función de encubrimiento, sobre todo si la persona que ha cometido el delito pertenece a

¿Víctimas o victimarias?

su núcleo familiar. Ante esta imperiosa realidad el legislador contempló en el artículo 454 del CP una excusa absolutoria, la cual será desarrollada en el cuarto capítulo.

A pesar de que los delitos contra la Administración de Justicia pueden encuadrarse tanto dentro de la delincuencia convencional como de la delincuencia de cuello blanco, es necesario tratarlo dentro del apartado contemplado para ésta última, porque el tipo penal recoge un matiz dedicado a aquellos individuos/as que utilizan el poder que ostentan como agentes públicos para favorecer su acción encubridora. En este sentido, no solo se impondrá la pena de privación de libertad sino que además, se contempla la inhabilitación especial o absoluta, según la gravedad del hecho, como penas accesorias, despojando a estas personas de la situación de “privilegio” que lleva aparejada ostentar un cargo público.

Una vez analizada la importancia de esta tipología penal para nuestro estudio, es imprescindible remitirnos a fuentes estadísticas para conocer su trascendencia dentro del plano criminológico.

Gráfico 5



Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Como se puede observar en la gráfica, la población reclusa por delitos contra la Administración de Justicia es muy reducida, a pesar de que no se especifica a qué tipo de modalidad delictiva corresponde. Con relación al colectivo masculino es visible que del año 2006 al 2011 se ha producido un incremento paulatino para posteriormente sufrir una caída importante y mantenerse estable, mientras que la población reclusa

¿Víctimas o victimarias?

femenina ha ido en aumento de una manera gradual pero a pesar de ello las cifras son mínimas.

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social están contemplados del artículo 305 al 310 dentro del Título XIV del CP. La necesidad de protección jurídica deriva del artículo 31 de nuestra Carta Magna, el cual establece:

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Este título fue objeto de modificación por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, para reforzar la transparencia de la administraciones públicas y mejorar la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y gastos públicos.

El bien jurídico a proteger sería el orden socioeconómico en sentido amplio, en cuanto a que el derecho penal económico no solo pretende proteger los intereses individuales sino también los colectivos.

En este apartado nos vamos a centrar especialmente en el delito fiscal y en el delito contra la Seguridad Social debido a dos casos mediáticos que representan tan solo la punta del iceberg de la criminalidad femenina en este sentido, el de Infanta Cristina y María José Campanario respectivamente. Cristina de Borbón se vio envuelta dentro de la trama de corrupción del Caso Nóos, la cual tuvo que sentarse en el banquillo de imputados junto a su cónyuge Iñaki Urdangarín, al ser considerada como cooperadora necesaria de los delitos fiscales cometidos por éste. No obstante, fue absuelta quedando sujeta únicamente a la responsabilidad civil por título lucrativo¹⁸.

El tipo básico del delito fiscal se encuentra regulado en el artículo 305 CP:

El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del

¹⁸ Ver Sentencia Caso Nóos. Audiencia Provincial de Baleares, Sección Primera. Sentencia nº 13/17.

¿Víctimas o victimarias?

apartado 4 del presente artículo. La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Por un lado, el tipo objetivo del delito fiscal entamaría una acción engañosa que induciría a error a la Administración Pública, lo cual atentaría contra el orden socioeconómico, y por otro, el tipo subjetivo presupone una motivación defraudadora del sujeto activo del delito.

Relativo a los delitos contra la Seguridad Social, el CP establece en el artículo 307 ter:

Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

En relación a esta modalidad delictiva hay que destacar el caso de María José Campanario y su progenitora, condenadas por falsedad documental oficial y tentativa de estafa cuando pretendían obtener una pensión de invalidez de la Seguridad Social para esta última (SAP de Cádiz, Sección 3º, nº 219/2011).

La pena impuesta fue inferior a dos años de prisión en ambos casos y al carecer de antecedentes penales, hizo que se pusiera en marcha la suspensión de la pena¹⁹. La sentencia fue pronunciada en el año 2011 no contemplando el tipo específico que introduce la reforma operada en este contexto, la LO 7/2012, la cual otorga un tratamiento penal diferenciado cuando se obtengan ayudas o prestaciones de la Seguridad Social de forma fraudulenta (Artículo 307 ter CP).

Este último caso delictual no se realizó en coautoría con sus respectivas parejas masculinas, lo cual pone en relieve que las mujeres tienen capacidad criminal individual para obtener sus fines delictivos.

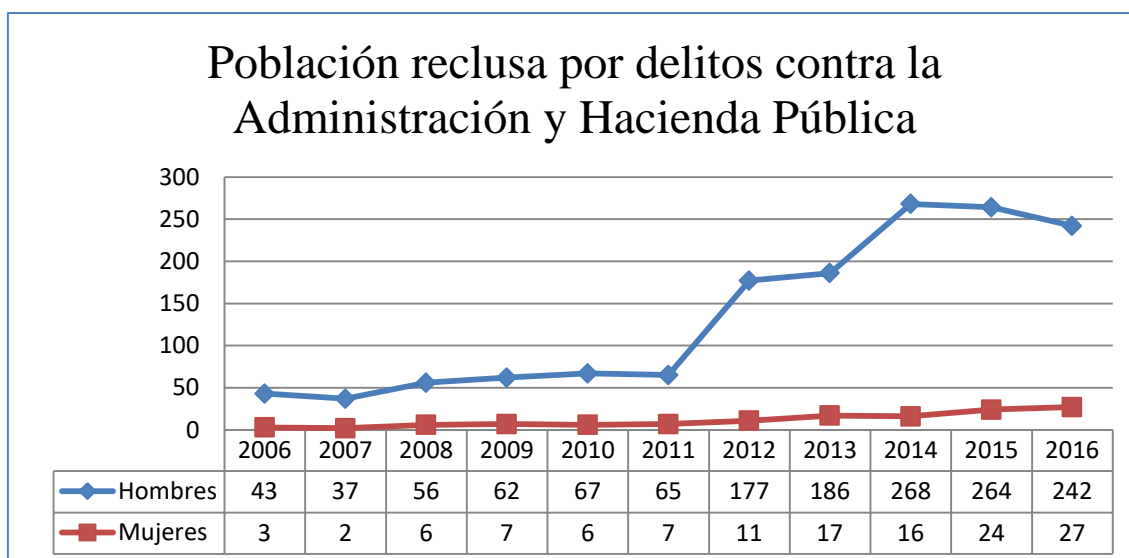
En cuanto a la población reclusa, hay que determinar que las estadísticas proporcionadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias engloban en la misma fuente los delitos contra la Administración y la Hacienda Pública. La población masculina se ha visto incrementada a partir del año 2011 en adelante, sin embargo, la

¹⁹Ver Sentencia “Operación Karlos”. Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Tercera. Sentencia nº 219/2011.

¿Víctimas o victimarias?

población femenina ha ido aumentando a lo largo de los años pero las cifras son ínfimas.

Gráfico 6



Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Delitos contra la Administración Pública.

Recogidos a lo largo de los nueve capítulos que contempla el Título XIX del CP, cuyo bien jurídico, como su propio nombre indica, es el correcto funcionamiento de la Administración Pública y el cumplimiento de los principios estipulados en este sentido por el artículo 103 de nuestra Constitución: “eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

Estas acciones u omisiones delictivas están íntimamente relacionadas con las funciones públicas y las autoridades que las ejecutan, sin obviar, que constituyen las modalidades más frecuentes de corrupción. Esta área penal ha estado sumida en diversas modificaciones, siendo la última la reforma operada por la LO 1/2015, cuya finalidad era reforzar el poder punitivo de los delitos contra la Administración Pública, así como el alargamiento de los plazos de inhabilitación lo que conllevaría a que los períodos de prescripción del delito también se amplíen. Finalmente, otro aspecto significativo a tener en cuenta, relativo a la libertad condicional, el artículo 90.4 del CP, establece que se podrá denegar, cuando el penado/a no haya satisfecho sus responsabilidades pecuniarias o de reparación del daño económico derivadas del delito que han cometido contra la Administración (Rasillo, 2016).

¿Víctimas o victimarias?

Dentro de este apartado, es preciso señalar a Ana María Tejeiro, imputada por delitos contra la Administración Pública entre otros, dentro del Caso Nóos. Esta mujer ocupó el banquillo de imputados/as por esta trama de corrupción, junto a su cónyuge, Diego Torres, al ser la encargada del área jurídica y fiscal del Instituto Nóos. A priori se consideró que Tejeiro pudo haberse valido de su ocupación laboral para realizar los actos delictivos que se le imputaban. Sin embargo, fue absuelta de todos los delitos por la AP de Palma de Mallorca, quedando sujeta únicamente a la responsabilidad civil a título lucrativo. Esta figura está contemplada en el artículo 122 del CP, ya que Ana María Tejeiro al igual que la Infanta Cristina participaron de los efectos de los delitos cometidos por sus cónyuges.

Para dar por concluido el capítulo, es necesario reflexionar como el sistema patriarcal, concebido como estructura de dominación, no solo influye en lo relativo al género, sino que va más allá, modelando la criminalidad femenina, pues sus representantes no solo son víctimas de las expectativas que la sociedad ha puesto sobre sus espaldas, sino que también son esclavas de la situación que ocupan dentro de la estructura social, política y económica.

CAPÍTULO IV: EXCUSAS ABSOLUTORIAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

El delito es definido como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable, aunque con carácter general, algunos autores/as y la jurisprudencia, introducen un quinto elemento: la punibilidad.

Si nos remitimos a la RAE, el vocablo punible haría referencia a la necesidad de imponer un castigo. Tomando como referencia este significado, podríamos afirmar que punible es aquella conducta susceptible de aplicársele una pena, siempre que concurren una serie de requisitos, los cuales serán detallados previamente por el instrumento jurídico penal (Olza, 2014).

Existe un agitado debate sobre la inclusión o no del elemento de punibilidad dentro de la teoría general del delito, algunos autores defienden que la punibilidad es un elemento esencial del delito, mientras que por el contrario, otro grupo lideraría la hipótesis de que el delito existiría por encima de la inclusión de la punibilidad como elemento definitorio (Marco, 2011).

Las excusas absolutorias permiten la exención del reproche penal atendiendo a una serie de circunstancias que concurren con posterioridad a la comisión del delito (Olza, 2014). El TS aporta la siguiente definición: “conjunto de circunstancias de dudosa y controvertida naturaleza jurídica [...], que aconsejan dejar sin punición determinados hechos delictivos no obstante están presentes en ellos las notas de antijuridicidad tipificada y culpabilidad” (Sentencia de 26 de diciembre de 1986).

La política criminal va a ser la disciplina encargada de fijar cuando un hecho que reúne todos los requisitos para ser calificado como delito, va a ser conveniente no castigarlo como tal. Las razones que adoptaría esta disciplina para determinar qué circunstancias son susceptibles de configurar una excusa absoluta son las siguientes: por un lado, el legislador apreciaría que el castigo penal no va a responder a los fines de la pena y por otro lado, la aplicación de la pena sería una decisión desacertada en determinadas circunstancias, suscitando más efectos negativos que positivos (Olza, 2014).

En cuanto a su clasificación, podemos diferenciar entre las que extinguen totalmente la pena (excusas absolutorias) y las que atenúan la pena (atenuantes). A su vez, también podrían ser clasificadas a tenor de su fundamentación en utilitarias, de reparación del mal causado por el delito y las que aprecian los lazos familiares y sentimientos de afecto (Marco, 2011).

En nuestro estudio, vamos a centrarnos en dos excusas absolutorias por la lectura de género que albergan. La primera sería la contemplada en el artículo 268 del CP relativa a los delitos patrimoniales entre familiares y la del artículo 454 sobre el delito de encubrimiento.

Excusa absolutoria del artículo 268 CP. Delitos patrimoniales.

En relación a los delitos patrimoniales, nuestro ordenamiento penal recoge en el artículo 268 la siguiente excusa absolutoria:

Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.

La relación de parentesco entre la persona infractora y la víctima del delito va a ser determinante para que se pueda aplicar esta medida de exención penal, siempre y cuando el delito patrimonial se cometa sin violencia, intimidación o mediante abuso de una situación de vulnerabilidad. Este último elemento fue introducido mediante la reforma llevada a cabo por la LO 1/2015, de 30 de marzo, aumentando con ello los requisitos para que se pueda aplicar esta medida.

El articulado del CP de 1973, anterior al vigente, especificaba qué delitos patrimoniales eran objeto de esta excusa absolutoria, siendo éstos los robos sin violencia o intimidación, hurtos, defraudaciones, daños o apropiación indebida (Marco, 2011). Sin embargo, en la nueva regulación no se especifica ningún delito en particular, adquiriendo un matiz generalista dentro de los delitos del patrimonio, siempre que no concurran las circunstancias descritas anteriormente.

¿Víctimas o victimarias?

La fundamentación de esta excusa absolutoria, la encontramos detalladamente en la STS, del cinco de marzo de 2003:

Se encuentra en una razón de política criminal que exige no criminalizar actos efectuados en el seno de grupos familiares unidos por fuertes lazos de sangre en los términos descritos en el art. 268 porque ello, sobre provocar una irrupción del sistema penal dentro del grupo familiar poco recomendable que perjudicaría la posible reconciliación familiar, estaría en contra de la filosofía que debe inspirar la actuación penal de mínima intervención y última ratio, siendo preferible desviar el tema a la jurisdicción civil que supone una intervención menos traumática y más proporcionada a la exclusiva afectación de intereses económicos como los únicos cuestionados, de ahí que se excluya los apoderamientos violentos o intimidatorios en los que quedan afectados valores superiores a los meramente económicos como son la vida, integridad física o psíquica, la libertad y seguridad.

En definitiva, lo que se pretende es no atentar contra el régimen familiar para evitar el resquebrajamiento de esta institución, presuponiendo que además de los vínculos consanguíneos o de afinidad, existe una relación de afectividad propiciada en el mejor de los casos por la convivencia. A pesar de esto, el concepto de familia al que hace alusión el legislador no se ha adaptado a los cambios sociales, debido a los cuales los miembros de la familia han ido disgregándose (Olza, 2014).

En cuanto a la relación matrimonial, el legislador manifiesta que están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil aquellos cónyuges que no estuviesen separados legalmente o de hecho o se encuentren en un proceso judicial con motivo de separación, divorcio o nulidad del matrimonio. Esta decisión legislativa, toma como punto de referencia no solo la finalización de la convivencia, sino también el cese del “afecto maritalis”, es decir, la voluntad de afecto, socorro y auxilio exigible dentro del matrimonio (Olza, 2014). Con ello se pretende proteger aquellas situaciones en las que debido a problemas en los procesos de divorcio o separación, acompañados en los peores de los casos de sentimientos de venganza, sean aprovechados por uno de los ex cónyuges para beneficiarse y perjudicar patrimonialmente al otro.

Llama la atención que en este precepto legal no se tengan en cuenta las relaciones análogas de afectividad, en auge en los últimos tiempos, a pesar de que en otros preceptos penales las relaciones conyugales si son equiparadas con dichas relaciones análogas, como por ejemplo, en la excusa absolutoria relativa al delito de encubrimiento.

¿Víctimas o victimarias?

Ante tal situación, se ha pronunciado el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del TS de uno de marzo de 2005 de la siguiente manera: “A los efectos del artículo 268 del Código Penal, las relaciones estables de pareja son asimilables a la relación matrimonial, teniendo en cuenta tres requisitos: 1) que sean estables, 2) que subsistan en el momento de la comisión del hecho y 3) que las acciones típicas se hayan producido exclusivamente entre la pareja y el delito no alcance a terceras personas” (Olza, 2014, p.33).

Para finalizar, en relación a la interpretación del tipo penal sobre el requisito de convivencia, cabe destacar que solo sería exigible a los afines de primer grado, quedando fuera de la exigibilidad de convivencia, los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, ya que se presupone que la relación de parentesco es tan sólida que no requiere que exista una convivencia efectiva.

Solventadas las cuestiones sobre la relación conyugal y de convivencia, es necesario remarcar que el instrumento jurídico penal debe ir adaptándose, en la medida de lo posible, a las modificaciones sociales, evitando con ello lagunas jurídicas que provoquen la desprotección de la persona perjudicada por una acción u omisión delictiva.

Excusa absolutoria del artículo 454 CP. Delito de encubrimiento.

El artículo 454 contempla una excusa absolutoria especialmente importante desde la perspectiva de género, porque un significativo porcentaje de mujeres encubren a sus cónyuges, parejas o cualquier miembro familiar que haya cometido un delito para evitar su ingreso en prisión, puesto que sus sentimientos de protección, abnegación y sacrificio por los demás, provoca que asuman el riesgo de convertirse en autoras de un delito de encubrimiento, el cual está castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años:

Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del número 1º del artículo 451.

De la normativa penal se desprende que los sujetos contemplados en el apartado número uno del artículo 451, es decir, los encubridores o encubridoras que ayuden a los

¿Víctimas o victimarias?

autores/as o cómplices de un delito a beneficiarse del resultado de éste, no podrán beneficiarse de la mencionada excusa absolutoria. Realmente este precepto jurídico está estrechamente ligado a los valores tradicionales de los lazos familiares en el sentido de ¿Qué se puede esperar de un progenitor, cónyuge, pareja²⁰ o cualquier miembro de la familia que tenga conocimiento sobre el delito que haya cometido algún miembro de su núcleo familiar? Es una cuestión moral que conllevaría un extenso debate.

El problema radica cuando en el delito intervienen un gran número de autores y la ayuda prestada pueda favorecer a personas que se encuentran fuera del círculo familiar. Ante esta problemática el TS ha manifestado en la sentencia del diecisiete de mayo de 2004:

La exención de responsabilidad por encubrimiento de parientes nada tiene que ver con el ajeno a la familia al no ser comunicable esta circunstancia, respecto al cual siempre subsistirá el citado delito de encubrimiento. Además una reiterada jurisprudencia de esta sala ha declarado que cuando la conducta se dirige a varias personas se debe rechazar la excusa absolutoria cuando concurra una situación psicológica movida y presidida por el deseo de ayudar a todos los miembros del grupo, por encima de la vinculación familiar a uno de ellos (García, 2008, p. 148).

Según lo expuesto, el parentesco es un elemento importante a tener en cuenta dentro del Derecho, pues en determinados delitos puede verse afectado algo tan “sagrado” como son los lazos familiares en nuestra sociedad occidental. El legislador, consciente de tan imperiosa necesidad, también reguló en el artículo 23 del texto penal, la circunstancia mixta de parentesco, la cual puede agravar o atenuar la responsabilidad criminal tomando como punto de partida la relación de parentesco entre el autor o autora y la víctima del delito.

²⁰ Audiencia Provincial de Madrid, Sección 26. N° de recurso: 31/2007. Sentencia n° 1/2008. Mujer que se le aplica la excusa absolutoria del artículo 454 del CP al encubrir a un hombre con la que mantiene una relación sentimental, el cual previamente había cometido dos homicidios.

CAPÍTULO V: TEORÍA DEL AMOR. ¿NUEVA ESTRATEGIA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD?

En los últimos años estamos asistiendo a una revolución en relación a las defensas utilizadas por los abogados en los procesos judiciales de las delincuentes de cuello blanco. Son numerosos los casos que aparecen en los medios de comunicación sobre mujeres investigadas o imputadas junto a sus parejas dentro de una trama de corrupción. Nada tienen que ver con el estereotipo femenino de criminalidad convencional, sino que como representantes de la delincuencia femenina de cuello blanco, ostentan cargos públicos y políticos debido a la formación tan cualificada que han recibido, gozando por ello de un alto poder adquisitivo. Sin embargo, a pesar de ello utilizan viejas estrategias patriarcales que aludirían a situaciones de subordinación frente a sus cónyuges, haciendo referencia a comportamientos dignos de incluir en la guía de la buena esposa de Pilar Primo de Rivera.

Son mujeres que han encontrado en el mito del amor romántico la solución a sus problemas penales. Reforzando con ello las posiciones dicotómicas entre cuerpo/alma, fuerza/debilidad, racionalidad/irracionalidad, cultura/naturaleza, y hombre/ mujer. Esta cuestión fuertemente debatida por el movimiento feminista, el cual pretende desanclar a las mujeres de la posición de subordinación frente a sus compañeros varones, hace que se ponga en tela de juicio por qué históricamente el patriarcado las ha relacionado con la debilidad e inestabilidad emocional, a la capacidad amorosa y total entrega a sus seres queridos ¿Realmente estas características son innatas del sexo femenino, debido a su estrecha relación con el mundo de los sentimientos?, ¿o, por el contrario, estas pautas de comportamiento han sido construidas e interiorizadas durante el proceso de socialización?

Esta visión dicotómica de elementos excluyentes, encierra un sistema de dominación en sí misma. Pues siempre obtendrá mayor reconocimiento y valor los elementos referentes al modelo masculino, es decir, el cuerpo, la fuerza, el orden, la racionalidad, la cultura, etc., ya que aún vivimos dentro de una sociedad en la que todo lo relacionado con lo femenino es infravalorado. Para el sistema patriarcal es necesario el triunfo masculino sobre lo irracional, el caos y/o la naturaleza, para ello crearon el mito del amor romántico, configurándolo como un instrumento de control para mantener bajo dominio al sexo femenino (Herrera, 2011).

¿Víctimas o victimarias?

Siguiendo a Coral Herrera (2011) es necesario manifestar que las emociones son un producto sociocultural, son construidas a través de los mitos, relatos, lenguaje, creencias, etc., las cuales son interiorizadas a través del proceso de socialización. Pues como diría, la famosa feminista, Simone de Beauvoir (1949) “La mujer no nace, se hace”. Los agentes socializadores, la familia, escuela, grupo de iguales, medios de comunicación, nos van a pautar cómo debemos comportarnos, relacionarnos y expresar nuestras emociones. Por tanto, la respuesta a las dos preguntas formuladas en líneas anteriores puede resumirse en una sola frase: “Las mujeres no nacemos amando, aprendemos a amar” (Lagarde, 2001, p. 13).

Al encontrarnos dentro de un sistema patriarcal, aprendemos a sentir y amar de la manera que estipula dicho sistema, es decir, mediante formas que incitan a la dependencia, discriminación y subordinación.

El amor es una mezcla de instintos, emociones, normas, prohibiciones y mitos bajo los cuales subyacen las creencias y cosmovisiones que los grupos de poder político y económico nos trasladan a través de la cultura. Estas creencias se invisibilizan porque se engalanan con las vestiduras de la magia del amor, pero nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestros sentimientos, están atravesados de ideología (Herrera, 2012).

Este sistema jerárquico donde opera directamente el género, fue ya definido por Gayle Rubin en la década de los setenta del siglo XX. Rubin acuñó el sistema sexo/género, el cual hace referencia a la jerarquía como estructura social, la cual ha sido construida a partir del plano biológico de las diferencias sexuales, creando relaciones jerárquicas que determinan que sexo debe ocupar cada espacio simbólico y físicamente (Rubin, 1975, cit. por Herrera, 2011).

Una vez explicada la jerarquía entre los sexos y la construcción sociocultural de las emociones, vamos ahondar sobre nuestro objeto de estudio, es decir, las defensas que utilizan las delincuentes de cuello blanco para eludir su responsabilidad criminal.

Son las propias mujeres del siglo XXI las que hacen uso de premisas patriarcales sobre el amor romántico, que en sí mismas encierran subordinación y discriminación para justificar sus comportamientos criminales, presentándose como seres dependientes de sus cónyuges, haciendo eco de una supuesta inmadurez, al no ser capaces de asumir sus fracasos, presentándose ante la sociedad como víctimas en lugar de asumir sus responsabilidades (Herrera, 2011).

¿Víctimas o victimarias?

Lagarde (2001) manifiesta que las mujeres contemporáneas somos fruto de lo que ella denomina “sincretismo de género”, es decir, somos producto de una construcción sociocultural tradicional pero a la vez estamos imbuidas por una construcción de género moderna. Ello deriva en un discurso interno donde se produce una confrontación entre los valores tradicionales y modernos. Esta autora también considera que un número significativo de mujeres que gozan formación y preparación académica tienen una venda en los ojos a la hora de analizar sus relaciones amorosas. Esta hipótesis plantea: ¿Las delincuentes de cuello realmente están cegadas por el mito del amor romántico? En mi opinión, considero que son plenamente conscientes de sus actos pero intentan evadirse a través de estrategias como el mito del amor romántico, la inmadurez o la dependencia respecto a sus cónyuges, porque son aspectos que tradicionalmente han sido vinculados al sexo femenino desde la perspectiva patriarcal.

Las delincuentes de cuello blanco, configuran un imaginario femenino que queda muy lejos de los estereotipos de rebeldía, transgresión y masculinización que se han asignado a las delincuentes desde tiempos inmemoriales por las teorías criminológicas y que aún se vinculan a las delincuentes convencionales, sin embargo, tales estigmatizaciones no son vinculadas a este primer grupo. ¿A qué se debe? La respuesta puede emanar de la premisa de que estas mujeres no han roto con el estereotipo tradicional de feminidad, pues adoptan la postura de víctimas, indefensas e ingenuas que han actuado en nombre del amor que profesan a sus cónyuges, ya que éstos suelen ser los que lideran las tramas de corrupción. Además a pesar de ostentar cargos públicos o políticos no descuidan la vida familiar siendo prioritaria para ellas, lo cual las convierte en la máxima expresión de la feminidad.

A continuación, vamos a exponer algunos ejemplos sobre la reciente acuñada “teoría del amor”, utilizada en numerosos procesos judiciales españoles.

En primer lugar, vamos a centrarnos en el caso marbellí “Operación Malaya” donde hay que resaltar a Maite Zaldívar e Isabel Pantoja, condenadas por un delito de blanqueo de capitales respectivamente. Estas dos mujeres tenían como nexo de unión, la relación amorosa que habían mantenido con el alcalde de Marbella, Julián Muñoz Palomo.

¿Víctimas o victimarias?

Por un lado, Maite Zaldívar alegó no tener conocimiento sobre el origen ilícito del dinero que traía su marido al domicilio familiar, mostrando una actitud confiada y carente de cuestionamientos:

Su marido llegaba (sic) a casa sobres o llevaba el dinero en un maletín, lo metía en una caja fuerte”, “que le preguntó por el origen del dinero y le dijo que era lo normal, que era un porcentaje de la comisión que pagaban los constructores al Ayuntamiento (STS 487/2014, p.107).

Incide en que el hecho de estar casada con un político no conlleva que tenga que sospechar de su marido porque gane mucho “dinero B”, ya que podía ser producto de sobresueldos por sus actividades en el partido o por su intervención en negocios con empresas legítimas que ella no tenía por qué conocer (STS 487/2014, p. 103).

El mismo comentario realiza con respecto a los gastos diarios y a su régimen de confort de vida, ya que no tenía la obligación de convertirse en espía, policía, fiscal o juez de la conducta de su cónyuge (STS 487/2014, p.104).

Como si se tratara de una trama amorosa, Julián Muñoz abandonó a su esposa, Maite Zaldívar, para iniciar una relación amorosa con la famosa tonadillera Isabel Pantoja. En este sentido, la defensa de su ex mujer, Maite, utilizó la estrategia del despecho, pues al ver amenazado su patrimonio ante la inminente relación entre Isabel y Julián no encontró otra salida que trasladar el dinero a cuentas bancarias en Suiza:

Ella nunca ha tenido independencia laboral ni económica desde que contrajo matrimonio, desempeñando el papel de simple consorte y de ama de casa, situación familiar que vio amenazada a partir de la relación extraconyugal que inició su ex marido, que culminó con la separación matrimonial y un depresivo estado emocional de la recurrente. Al hallarse en un callejón sin salida, dice, reaccionó cogiendo el dinero para llevarlo lo más lejos posible, como habrían hecho muchas mujeres abandonadas si se hubieran hallado en una situación similar (STS 487/2014, p.105).

Por otro lado, la defensa de Isabel Pantoja adoptó la estrategia de ceguera por amor, resumida bajo la siguiente frase: “Las hormonas le impidieron ver la verdad sobre lo que ocurría”²¹. El letrado hizo alusión al gran filósofo español Ortega y Gasset, el cual llegó a escribir en 1941 un tratado de psicología titulado “Estudios sobre el amor”. Independientemente del aturdimiento emocional que se presuponía a Isabel Pantoja, ésta a diferencia de Maite Zaldívar la cual se mostró como una débil e indefensa ama de casa, adoptó la postura de una mujer independiente que hacía uso de su propio dinero, pues poseía diversas sociedades, llegando a manifestar que era ella la que mantenía

²¹ El abogado de Isabel Pantoja: Las hormonas le impidieron ver la verdad sobre lo que ocurría. (8 de Mayo de 2014). El Mundo. Recuperado: <http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05/08/536b7e4422601d1a478b4576.html>.

¿Víctimas o victimarias?

económicamente al ex alcalde de Marbella: “Yo mantuve a Julián Muñoz y le di todo el dinero. Él no tenía nada. Yo le seguí y lo hice todo por él”²².

Era yo la que le daba a él, era yo quien lo mantenía, era yo quien le di trabajo, era yo quien le pagaba su sueldo, porque él me dijo que quería ganarse su pan, proseguía²³.

En segundo lugar, vamos a analizar las defensas de las mujeres investigadas dentro de la “trama Gürtel”; Rosalía Iglesias, María del Carmen Rodríguez Quijano, Ana mato, Teresa Gabarra, entre otras. Todas ellas comparten la misma estrategia para eludir la responsabilidad de sus actos. Se presentan como mujeres que tienen una confianza plena en sus maridos o ex maridos, siendo tal la ceguera que son incapaces de cuestionar cualquier hecho que pudiera ponerla en entredicho. Es como si nos remontásemos al siglo XVIII donde las decisiones que eran tomadas por el cabeza de familia no podían ser rebatidas por su esposa. Sin embargo, esto era “admisible” en tal situación, no en una época donde las mujeres gozan de libertad para expresar cualquier opinión, además de no estar recluidas en la esfera doméstica, pues también participan en la vida pública e incluso ocupan puestos de responsabilidad política.

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, llegó a manifestar frases de la siguiente índole:

Mi marido nunca ha hablado conmigo de temas de trabajo, no sé si es algo difícil de entender. Tenemos una vida personal llena, y no es que sea algo que no me interese, pero era algo de lo que no hablábamos²⁴.

Yo... no quiero explicar, pero en fin, yo no soy tonta, pero si mi marido me dice... y desde luego no pongo jamás en cuestión, ni lo he puesto, documentos que requieran mi firma; él gestiona una cartera de valores mía y doy por hecho que son compraventa de acciones.²⁵

²² Amor, despecho y bolsas de basura. (21 de Noviembre de 2014). El Mundo. Recuperado: <http://www.elmundo.es/loc/2014/11/21/546a275ce2704efd258b4587.html>.

²³ Amor, despecho y bolsas de basura. (21 de Noviembre de 2014). El Mundo. Recuperado: <http://www.elmundo.es/loc/2014/11/21/546a275ce2704efd258b4587.html>.

²⁴ Pérez, Fernando (23 de Enero de 2017). La esposa de Luis Bárcenas: “Todo lo que hace mi marido me parece bien”. El País. Recuperado: https://politica.elpais.com/politica/2017/01/23/actualidad/1485166205_871386.html.

²⁵ La mujer de Bárcenas: “Yo no soy tonta y, desde luego, no le pongo jamás en cuestión” (23 de Enero de 2017). El Confidencial. Recuperado: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-23/mujer-barcenas-declaracion-gurtel_1320335/.

¿Víctimas o victimarias?

Carece de conocimientos, preparación o formación alguna para liquidar los tributos, realizar las inversiones, manejar cuentas bancarias o realizar cualquier tipo de operación ya fuera mercantil o de carácter económico o fiscal²⁶.

Asimismo, un elemento a tener en cuenta es que Rosalía Iglesias, solicitó al juez un aumento de la cuantía para hacer frente a los gastos mensuales, en la que contempló cincuenta euros para acudir a la peluquería, lo que pone en relieve el estereotipo de feminidad de las delincuentes de cuello blanco²⁷.

María del Carmen Rodríguez Quijano, ex jefa del gabinete del alcalde de Majadahonda y ex esposa del empresario Francisco Correa, aseguró no saber nada sobre las actividades ilícitas de su ex marido, a pesar de aparecer como administradora y consejera de dos de las empresas salpicadas por la trama de corrupción. La siguiente manifestación expresa su supuesta ignorancia:

Lo único que hacía era firmar lo que él le pedía sin mirar de qué se trataba. No le di mayor importancia, me lo pidió y en ese momento no sabía todo lo que puede conllevar, la verdad es que confíe y lo hice²⁸.

Otra de las investigadas fue Ana Mato, ex ministra de Sanidad, integrante del Partido Popular y ex esposa de Sepúlveda, también imputado dentro de la trama Gürtel. Manifestó no tener conocimiento sobre el sueldo de su ex marido con frases como esta: “La verdad es que no, no sé cuál sería, pero me imagino que tendría un buen sueldo” o ante la pregunta de si le sorprendió ver aparcado un jaguar en su garaje expresó: “No me llamó la atención”. Además, sobre cuestiones familiares afirmaba: “Los viajes particulares míos, los abonaba yo, los viajes familiares que contrataba mi ex marido los abonaba él (...) Las facturas, en caso de tenerlas, las tendrá que tener él, nunca yo”²⁹. Nuevamente la ignorancia toma partido como estrategia para eludir la responsabilidad, a pesar de ostentar una formación y ocupar un cargo político de tal magnitud que le

²⁶ Romero, José M. (7 de Mayo de 2015) La esposa de Bárcenas alega ignorancia para pedir su absolución. El País. Recuperado: https://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/1430984800_612250.html.

²⁷ Atlas. (20 de Noviembre de 2013). La lista de la compra de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, llega al juez. El País. Recuperado: https://politica.elpais.com/politica/2013/11/20/videos/1384954667_383033.html.

²⁸ La ex mujer de Correa “firmaba todo sin mirar” y no sabe “cómo se pagó” su vivienda de Majadahonda. (30 de Noviembre de 2016). OK Diario. Recuperado: <https://okdiario.com/espana/2016/11/30/ex-mujer-correa-firmaba-sin-mirar-no-sabe-pago-vivienda-majadahonda-566691>.

²⁹ Pinheiro, Marcos. (13 de Febrero de 2017). Ana Mato dice que nunca le llamó la atención que en su garaje hubiese coches de alta gama. El Diario. Recuperado: http://www.eldiario.es/politica/Ana-Mato-responsabiliza-exmarido-Gurtel_0_612088872.html.

¿Víctimas o victimarias?

facilitaría adoptar una postura más crítica ante hechos que chirrían al ser susceptibles de corrupción.

Por el contrario, Teresa Gabarra, mujer de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, presenta una postura completamente contraria a sus compañeras de banquillo, pues adopta una posición dominante respecto a su marido.

Yo soy la persona que maneja, pues casi todas las cosas en mi casa, eh... yo soy la que hago la renta, yo soy la que voy a los bancos, yo soy la que decide y bueno en mi casa son dos hombres y una mujer y decido yo. Mi marido no puede tener nada escondido porque lo averiguaría yo, es decir, mi marido no compra nada que no sea consensuado entre los dos³⁰.

Gabarra, concluye que su patrimonio es anterior a su relación con López Viejo debido a la situación acomodada que disfrutaban los progenitores de ésta, por tanto, el incremento patrimonial del matrimonio no tendría su origen en la trama Gürtel, sino por el patrimonio que ya poseían previamente. A pesar de ello, la Hacienda Pública ha demostrado que el dinero de las cuentas de Suiza no corresponde a Gabarra³¹, por tanto, ¿de dónde procede ese dinero? Presuntamente de las acciones corruptas de López Viejo.

Gabarra demuestra una conducta totalmente opuesta a las anteriormente citadas, pues asegura que ella es la dueña del dinero y la que obligó a su marido a poner el nombre de éste como titular de las cuentas en Suiza.

No le voy a negar a esta Sala que en alguna ocasión me han dado ganas de decirle carga tu todo con esto, pero la educación que me han dado mis padres no me lo permite y además el dinero es mío³².

Para finalizar el capítulo, vamos a contemplar la implicación femenina en el “Caso Nóos”. Sus principales representantes fueron Ana María Tejeiro y la Infanta Cristina. Ambas trabajaban en el Instituto Nóos; mientras que Ana María Tejeiro se dedicaba al área jurídica y fiscal, la Infanta Cristina lideraba el área comercial. A pesar de gozar de una reconocida formación profesional, nuevamente pusieron en marcha la táctica de la ignorancia y de la plena confianza en sus respectivos cónyuges.

³⁰ La mujer de López viejo asegura que "si mi marido tuviera escondido lo encontraría". (9 de Febrero de 2017). El Correo. Recuperado: <http://www.elcorreo.com/videos/politica/201702/09/mujer-lopez-viejo-asegura-5317456224001-mm.html>.

³¹ EFE. (13 de Marzo de 2014). Hacienda desmiente que el dinero que López Viejo tenía en Suiza perteneciese a su mujer. El Mundo. Recuperado: <http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/13/5321fd4fe2704e74718b4582.html>.

³² La mujer de López Viejo justifica con su patrimonio el dinero del matrimonio. (9 de Febrero de 2017). La Vanguardia. Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/vida/20170209/414182992239/la-mujer-de-lopez-viejo-justifica-con-su-patrimonio-el-dinero-del-matrimonio.html>.

¿Víctimas o victimarias?

Ana María Tejeiro, manifestó en su defensa, que únicamente se dedicaba a cumplir las órdenes que le encomendaban, sin cuestionarse absolutamente nada:

Pues, desde, eso como ir a cobrar un cheque, como ir a correos, buscar un tipo de papel especial, intentar buscar un persona adecuada para un puesto de trabajo para que ellos los entrevistaran, no sé, tareas de este tipo³³.

Yo no tomo decisiones de ese tipo, no, yo no sé de temas de números y de esto y mi marido sabe muchísimo. Lógicamente dejo que tome él las decisiones de eso, no se me ocurre, a ver, es que sería imbécil si tomara yo las decisiones de una cosa que sé mucho menos, obviamente, lo dejo en sus manos, que es una persona muy capaz y que sabe mucho de esto³⁴.

A pesar de ello, la principal garante de la teoría del amor, de la que se hicieron eco todos los medios de comunicación, fue la Infanta Cristina, la cual profesó en todo momento el amor y la plena confianza que sentía por su marido, Iñaki Urdangarín. La institución hegemónica del matrimonio quedó reforzada bajo el efecto “Romeo y Julieta”. Este efecto es producto del imaginario del amor romántico, haciendo referencia a la necesidad de superar los obstáculos juntos, pues cuantas más adversidades tengan que enfrentar, más unidos permanecerán los miembros de la pareja (Herrera, 2012).

El escrito de defensa presentado ante los juzgados de Palma de Mallorca, mostraba que a pesar de que Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín eran los dos únicos administradores de la compañía de Aizoon, solo éste último se dedicaba a la dirección y gestión de ésta, debido a la plena confianza que existía entre los cónyuges, pues la imputada solo se dedicaba a firmar lo que su marido le exigía. Aseguraba ser una mujer muy ocupada debido a sus obligaciones familiares, institucionales y profesionales, lo que le impedía tener conocimiento sobre las gestiones operadas en la economía familiar. Ella misma se presentaba como una mujer con “nulos” conocimientos en materia fiscal, como consecuencia de ello, el matrimonio decidió realizar un reparto de tareas, dedicándose Iñaki Urdangarín a los asuntos estrictamente económicos³⁵.

³³ Declaración de Ana María Tejeiro. Ara Cat. Recuperado: <http://www.ara.cat/2013/02/22/870592934.pdf?hash=e78e8bf772d2a9e1e7e52fcb2e8fd70216f48fad>.

³⁴ Declaración de Ana María Tejeiro. Ara Cat. Recuperado: <http://www.ara.cat/2013/02/22/870592934.pdf?hash=e78e8bf772d2a9e1e7e52fcb2e8fd70216f48fad>.

³⁵ Escrito de defensa de la Infanta Cristina. Diligencias previas nº 2677/2008. Juzgado de Instrucción nº3 de Palma de Mallorca. El Diario. Recuperado: http://www.eldiario.es/politica/DOCUMENTO-Escrito-defensa-infanta-Cristina_0_375162760.html.

¿Víctimas o victimarias?

En la declaración aportada por la Infanta Cristina, predominaron frases como “no lo recuerdo” o “lo desconozco”, propias de un estado permanente de amnesia, pues solo se esforzó en demostrar la plena confianza que tenía respecto a su marido³⁶:

No Señoría, porque nosotros no teníamos costumbre de hablar de las actividades de Nóos, teníamos otros muchos temas de los que hablar y realmente no hemos hablado nunca de esto.

Mi marido me lo propone y con la confianza que le tengo, yo lo acepto, crea Aizoon para canalizar sus ingresos profesionales y a partir de ahí yo no he tenido nada más que ver, ya lo ha llevado él, yo no he intervenido en nada.

Yo estoy segura que mi marido, yo confiaba en mi marido y mi marido ha hecho las cosas de la mejor manera posible y confío en que lo ha hecho bien, si está asesorado de una manera o estuvo asesorado de una manera o de otra, lo desconozco.

No lo sé Señoría, yo no me he ocupado de los gastos y las facturas, todo esto lo ha llevado siempre mi marido, realmente, en casa teníamos repartidas las funciones y él se ha ocupado siempre de toda la parte financiera de la economía familiar.

A consecuencia de ello, la defensa intentó demostrar que su defendida no había incurrido en la estrategia de “ignorancia deliberada”, citando la STS 57/2009, de 2 de febrero, en la que se contempla los requisitos que se deben de cumplir para considerar tal situación:

1. Una falta de representación suficiente de todos los elementos que definen el tipo delictivo de que se trate. Esa falta de representación, si es absoluta, nunca podrá fundamentar la imputación subjetiva a título de dolo. Los supuestos abarcados estarán relacionados, de ordinario, con la conciencia de que se va a realizar, con una u otra aportación, un acto inequívocamente ilícito. La sospecha puede incluso no llegar a perfilar la representación de todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, al menos, con la nitidez exigida de ordinario para afirmar la concurrencia del elemento intelectual del dolo. Sin embargo, sí ha de ser reveladora de una gran indiferencia del autor hacia los bienes jurídicos penalmente protegidos, pues, pese a representarse el riesgo que su conducta puede aparejar, no desiste del plan concebido.

2. Una decisión del sujeto de permanecer en la ignorancia, aún hallándose en condiciones de disponer, de forma directa o indirecta, de la información que se pretende evitar. Además, esa determinación de desconocer aquello que puede ser conocido, ha de prolongarse en el tiempo, reforzando así la conclusión acerca de la indiferencia del autor acerca de los bienes jurídicos objeto de tutela penal.

3. Un componente motivacional, inspirado en el propósito de beneficiarse del estado de ignorancia alentado por el propio interesado, eludiendo así la asunción de los riesgos inherentes a una eventual exigencia de responsabilidad criminal(Diligencias Previas nº 2677/2008, p.20-21).

³⁶ Declaración íntegra de la infanta Cristina ante el juez José Castro. (20 de Febrero de 2014). El País. Recuperado: https://politica.elpais.com/politica/2014/02/20/actualidad/1392913721_399695.html.

¿Víctimas o victimarias?

A modo de conclusión, podemos extraer las siguientes ideas: la teoría del amor, basada en los valores de confianza e ignorancia, están cobrando cada vez mayor importancia dentro de los procesos judiciales sobre corrupción. Esta táctica defensiva es utilizada especialmente por las presuntas delincuentes de cuello blanco, para lograr eludir su responsabilidad, pues la mayoría de los hechos delictivos los llevan a cabo junto a sus cónyuges o ex cónyuges. A consecuencia de ello, es representativo, que a pesar de ser representadas por distintos abogados se acojan a la misma estrategia defensiva.

La justificación de esta elección puede devenir de premisas patriarcales, al considerar a las mujeres como seres sin capacidad crítica y decisiva, siendo presentadas a la sociedad como grandes víctimas del amor que profesan a sus maridos, ya que tradicionalmente, el mundo de los sentimientos y de los sacrificios por amor, ha sido liderado por excelencia por el género femenino, reproduciendo el estereotipo de feminidad estrictamente patriarcal. Estas mujeres del siglo XXI, titulares de los “mismos” derechos y libertades que sus compañeros varones, no solo gozan de una preparación académica y profesional, sino que también la mayoría de ellas ostentan cargos públicos y políticos, pero a pesar de ello, siguen cayendo en la trampa de la división sexual de roles.

Adoptan la postura de mujeres ignorantes, dedicadas principalmente a sus funciones familiares, siendo su postura pública meramente una pantalla para favorecer la carrera delictiva de sus cónyuges. Si bien, esta postura no debe distraer a los magistrados/as de la verdadera conciencia criminal que pueden ostentar estas delincuentes de cuello blanco.

CAPÍTULO VI: ¿REALMENTE EXISTE LA IGUALDAD ANTE LA LEY?

Para iniciar este capítulo es imprescindible remitirnos al artículo 14 de la Constitución Española:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Según este precepto constitucional, a priori todas las personas son iguales ante la aplicación legislativa, sin embargo, numerosos casos ponen de relieve que esto no es del todo cierto, tratándose de una mera igualdad formal, quedando bastante lejos la consecución de la igualdad real o efectiva.

Aplicando esta cuestión a nuestro objeto de estudio, es decir, la comparación entre la criminalidad convencional y criminalidad de cuello blanco, podemos destacar varias ideas al respecto. Sutherland, ya intentó demostrar en su obra, *White Collar Crime*, que existía una aplicación diferenciada de la ley, en relación a estas dos esferas de criminalidad. Por un lado, la criminalidad convencional se vio envuelta por un aura de estigmatización debido al estereotipo de marginalidad que ostentaban sus integrantes, pues tradicionalmente los delincuentes convencionales solían llevar a cabo delitos violentos que despertaban un férreo reproche de la ciudadanía (Zúñiga, 2015). Ante tal circunstancia, el legislador apostó por aplicar medidas penales severas, siendo la pena privativa de libertad la más utilizada para acallar el sentimiento de inseguridad de la población (Virgolini, 2004).

Por otro lado, la delincuencia de cuello blanco no había sido percibida como una amenaza social (Zúñiga, 2015) pues la sociedad no era consciente del perjuicio y el daño que puede ocasionar esta modalidad delictual, al tratarse de un fenómeno abstracto donde no existe una relación interpersonal entre víctima y autor/a del delito (Burgos, 2015). Los delitos de cuello blanco son producto de maniobras excesivamente complejas, que a su vez, provienen de estructuras económicas y políticas donde el anonimato es el principal garante de impunidad, lo cual dificulta su persecución penal. Además, la falta de reproche social es consecuencia de tres elementos a tener en cuenta: el estatus social del delincuente de cuello blanco, la tendencia hacia la ausencia de

castigo y el sentimiento desorganizado de la sociedad respecto a este tipo de delitos (Virgolini, 2004).

En primer lugar, el estatus social incide directamente en el proceso de criminalización secundaria, pues los jueces pertenecen mayoritariamente a la misma clase social que los delincuentes de cuello blanco, lo que impide que se creen sentimientos de hostilidad y lejanía, cosa que sí sucede con los integrantes de la criminalidad convencional. También es característica la simultaneidad entre sentimientos de miedo y admiración, por la influencia política y económica que ostentan los representantes de la criminalidad de cuello blanco, así como por la visión cultural que se suele tener sobre este colectivo de “máxima respetabilidad”. Todo ello sin olvidar, que tienen a su alcance a los mejores representantes de la abogacía para garantizar una óptima defensa (Virgolini, 2004).

En segundo lugar, hay que tener en consideración el proceso de criminalización primaria, en el sentido de que muchas de las conductas que son susceptibles de ser constitutivas de un delito de cuello blanco no se encuentran criminalizadas, o en el caso de que sí lo estén, albergan descripciones típicas de los hechos muy técnicas y complejas, lo cual genera confusión a la hora de proceder a la adscripción de responsabilidad penal (Virgolini, 2004). En cuanto a la aplicación de medidas sancionadoras, el legislador se ha decantado principalmente por penas pecuniarias y penas privativas de derechos, donde la pena privativa de libertad brilla por su ausencia (Zúñiga 2015; Burgos, 2015).

Todo lo expuesto anteriormente, deriva en la falta de reproche social ante este tipo de conductas, al contrario de lo que sucede con los representantes de la criminalidad convencional. Generalmente, las personas de a pie no llegan a captar los daños que estos delitos provocan en los flujos económicos y financieros y, por ende, en las estructuras sociales (Burgos, 2015). El reproche social está estrechamente vinculado con el sistema penal, ya que este último es el principal generador de los estereotipos criminales. Los sistemas policiales y judiciales han estado orientados a perseguir y castigar a los miembros de las clases sociales más bajas, pues tradicionalmente se ha identificado a las clases marginales como productoras de conductas criminalizadas, vinculación que ya trató de desligar Sutherland. (Virgolini, 2004).

¿Víctimas o victimarias?

Esto ha provocado que los delincuentes de cuello blanco no sean contemplados como potenciales delincuentes. Esta concepción está cambiando en los últimos años, pues la demanda de los medios de comunicación y el eco social que ello genera, ha ocasionado un cambio en la percepción de la ciudadanía, donde está cobrando cada vez mayor peso el sentimiento de indignación³⁷.

La férrea persecución y condena de la criminalidad convencional, en contraposición a la impunidad de la criminalidad de cuello blanco, es perceptible en dos casos que vamos a citar a continuación.

Dentro de la criminalidad convencional, quedaría encuadrado el caso de Emilia Soria, la cual utilizó una tarjeta de crédito perdida que encontró en la vía pública para comprar alimentos y productos de higiene para sus hijas. Por este hecho fue condenada por un delito de falsificación de documento mercantil a la pena de un año y diez meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a una multa de diez meses, así como, a seis meses de prisión por un delito de estafa. Según fuentes periodísticas, el delito lo cometió cuando tan solo contaba con veintidós años de edad, la cual encontrándose en una situación de precariedad económica y con dos hijas a su cargo, no dudó en hacer uso de la tarjeta de crédito que encontró³⁸.

Las elevadas penas entroncaban frontalmente con la escasa entidad del hecho, lo cual, provocó que los medios de comunicación no tardaran en hacer pública la noticia, generando una gran movilización ciudadana para lograr el indulto de esta mujer.

En un primer momento, se sustituyó la pena contemplada por el delito de estafa por seis meses de TBC. Finalmente consiguió el indulto y la conmutación de la pena relativa al delito de falsificación de documento mercantil por treinta días de TBC, siempre que no cometiera un delito en el plazo de tres años³⁹.

Este hecho es totalmente opuesto al de la Infanta Cristina, investigada dentro de la trama de corrupción conocida popularmente como el “Caso Nóos”. Aunque tuvo que

³⁷Transparency International España. Recuperado:http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/aspectos_destacados_ipc-2016.pdf.

³⁸ Atlas (17 de Enero de 2013). Condenada a prisión por comprar comida con una tarjeta de crédito que se encontró. El Mundo. Recuperado: <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/17/valencia/1358409729.html>.

³⁹ Real Decreto 85/2013, de 1 de febrero, por el que se indulta a Doña Emilia Soria Morey.

¿Víctimas o victimarias?

sentarse en el banquillo de imputados/as por dos presuntos delitos contra la hacienda pública, logró ser absuelta, tras utilizar la “teoría del amor”.

Estos dos casos son representativos, porque en ambos confluyen los factores de género y clase social. Mientras que en el primer caso, la mujer actuó para hacer frente a un estado de precariedad económica donde las necesidades básicas de sus hijas estaban insatisfechas, la segunda presuntamente actuó por medio de la confianza y el amor que profesaba a su marido. Son dos causas estrechamente ligadas con el estereotipo de feminidad, la ética del cuidado y el amor, ya sea hacia sus hijas, como en el primer caso, como hacia su cónyuge en el segundo. En cuanto a la clase social, la primera pertenece a una clase social baja, mientras que la segunda goza no solo de un alto poder adquisitivo, sino que además pertenece a la monarquía española.

Uno de los aspectos que más han variado en los últimos años ha sido, el reproche social, volcándose la sociedad española con Emilia Soria a través de numerosas firmas para conseguir su indulto, mientras que mostraba un elevado sentimiento de indignación ante la absolución de Cristina de Borbón⁴⁰.

Al contrario de la Infanta Cristina, Isabel Pantoja, envuelta en el “Caso Malaya”, sí tuvo que hacer frente a los dos años de prisión por la autoría de un delito de blanqueo de capitales, a pesar de cumplir con los requisitos del artículo 81 del CP, relativo a la suspensión de la pena. El tribunal alegó, que no solo había realizado un hecho calificado de gravedad, sino que además era una imagen mediática, configurándose su acción como “un paradigma de ilegalidad criminal en el aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público y, en tal sentido, de enorme gravedad social” (AP Málaga, Procedimiento Abreviado nº12-10, p.9). La postura judicial se fundamentó en la no asunción de la responsabilidad de los hechos, para no proceder al beneficio de la suspensión de la pena.

Con esta aplicación judicial, lo que se pretendía era restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, mediante la prevención general de la pena, es decir, persuadir a través de la aplicación de una pena privativa de libertad para evitar que otros miembros de la sociedad realicen estas tipologías delictivas, que afectan a los intereses públicos y colectivos.

⁴⁰La sentencia del Caso Nóos en Twitter: Simpson, Pantoja y mucha ironía. (17 de febrero de 2017). El Mundo. Recuperado: <http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/02/17/58a6e59d46163fd3738b4622.html>.

A pesar de todo lo expuesto, algunas representantes de la criminalidad de cuello blanco han alegado haber sufrido un trato desfavorable respecto a otras mujeres imputadas en su misma trama corruptiva. Por ejemplo, Maite Zaldívar en su recurso de casación, manifestó haber recibido un trato desfavorable respecto a Isabel Pantoja, al contemplarse a la primera un delito de blanqueo de capitales continuado, mientras que a la segunda se le imputaba un delito de blanqueo de capitales sin continuidad delictiva⁴¹. Ante este recurso el TS dictó lo siguiente:

Para que sea imperativa la aplicación de la ley con un mismo resultado punitivo ha de partirse de la premisa de que la situación fáctica de ambas acusadas sea sustancialmente igual, de modo que el trato legal desigual no obedezca a una justificación objetiva y razonable. Y tal circunstancia no concurre en el presente caso, puesto que tanto en la prueba practicada en el plenario como en la sentencia se plasman datos objetivos reveladores de que las circunstancias que concurren en la conducta de una y otra inculpada no son las mismas, según se desprende de la lectura del “factum” de la sentencia recurrida (STS 487/2014, p.120).

Por el contrario, a pesar de que finalmente Maite Zaldívar, logró que se le apreciase un delito de blanqueo de capitales sin continuidad delictiva, el debate sobre el trato favorable no cesó, trasladándose al ámbito penitenciario. Algunas noticias procedentes de Alcalá de Guadaira, centro penitenciario en el que cumplió condena Isabel Pantoja, manifestaban que ésta había recibido un trato que podría ser calificado de favorable como, por ejemplo, mantener una estrecha relación con la directora de la prisión, visitas guiadas al recinto tras su ingreso, seguir utilizando la misma celda de la que disfrutó mientras estuvo en régimen cerrado una vez que ya pasó al régimen de semilibertad o la retirada del fichero oficial de su foto carcelaria.

Según, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, la inspección penitenciaria que se habría enviado al centro penitenciario de Alcalá de Guadaira, habría negado “rotundamente” que se hubiera ofrecido un trato de privilegio a Isabel Pantoja⁴². Contrariamente, a las manifestaciones de las funcionarias e internas que habían compartido con ésta su estancia en prisión.

Otro supuesto de trato favorable, lo recogen diversas fuentes periodísticas, sobre la Infanta Cristina. Sin embargo, dicho trato quedó envuelto bajo la justificación de la

⁴¹STS. Sala de lo Penal. Sentencia nº 487/2014. Recurso de casación nº 10723/2013.

⁴²Interior nieva privilegios a Pantoja y los funcionarios se reafirman. (2 de Julio de 2015). Recuperado: <https://www.acaip.es/es/noticias/medios-de-comunicacion/5735-instituciones-penitenciarias-descarta-trato-de-favor-a-isabel-pantoja-tras-una-investigacion-leer-mas->.

¿Víctimas o victimarias?

necesidad de aplicar medidas de seguridad debido al personaje público y aristocrático del que se trataba. Algunas medidas favorables fueron: la entrada a los juzgados de Palma de Mallorca mediante un vehículo, no cruzar el arco de seguridad en el juzgado, el interrogatorio no fue grabado en vídeo, disfrutar de los recesos en una sala privada, entre otros⁴³.

¿Realmente recibieron un trato favorable? Ello podría derivar de la respetabilidad y el estatus que ostentan las delincuentes de cuello blanco y la benevolencia que tienen las autoridades con ellas.

Para finalizar este capítulo, nos podemos formular la siguiente pregunta: ¿Qué sucede cuando la mujer que ha cometido un delito no cumple con el estereotipo de feminidad?

Algunas teorías criminológicas alegan que las mujeres reciben un trato policial y judicial más “benévolo” respecto a los hombres, al considerarlas como seres que necesitan estar bajo tutela debido a su presunta inmadurez. Este tratamiento encontraría su justificación, en las premisas patriarcales, las cuales construyen la identidad femenina bajo los conceptos de víctima, inmadurez y necesidad de corrección (Lima, 1988). Este tratamiento “liviano” solo sería aplicado a aquellas mujeres que a pesar de haber transgredido la norma penal cumplan con el estereotipo de feminidad, pues en el caso de no cumplirlo, recibirían un tratamiento más severo y rígido.

A pesar de ello, tanto los agentes policiales como las autoridades judiciales deben de garantizar en todo momento un trato igualitario y libre de discriminación, pues se trata del segundo derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, se ha constatado que algunas personas no son tratadas en igual de condiciones debido a su sexo, orientación sexual, nacionalidad... por ello se hace necesario la redacción de normas que eviten este tipo de acciones discriminatorias⁴⁴. No debemos olvidar que aunque cada vez el trato sea más igualitario, en épocas anteriores, las mujeres que se desviaban del rol eran reclutadas en casas de corrección, pudiendo existir algún residuo actualmente en nuestra sociedad.

⁴³Los privilegios de la infanta en el juzgado de Palma. (8 de Febrero de 2014). Libertad Digital. Recuperado: <http://www.libertaddigital.com/espana/2014-02-08/los-privilegios-de-la-infanta-en-el-juzgado-de-palma-1276510273/>.

⁴⁴Guía para la gestión policial de la diversidad. Recuperado: http://gestionpolicialdiversidad.org/PDFactividades/guia_gestion_policial_diversidad.pdf.

El género y la clase social van a ser determinantes tanto en la andadura criminal como en el tratamiento que van a recibir posteriormente por las instituciones policiales y judiciales, por el hecho de ser mujeres y por la clase social a la que pertenezcan.

CAPÍTULO VII: EL IMPACTO MEDIÁTICO DE LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO.

En las últimas décadas, los medios de comunicación están influyendo notablemente en los procesos judiciales, creando juicios mediáticos paralelos, especialmente cuando se trata de personajes públicos envueltos en tramas de corrupción.

Los integrantes de la delincuencia de cuello blanco, por su estatus social y por los cargos políticos, empresariales y económicos que ostentan, suelen estar bajo la mira de la opinión pública. Igualmente sucede con las representantes del colectivo femenino pero, por el contrario, éstas son “enjuiciadas” mediáticamente dentro de la crónica rosa.

El despliegue periodístico sobre procesos judiciales, se asienta en España con la irrupción del Estado Social y Democrático de Derecho, quedando reflejado en el artículo 120.1 de la Constitución Española de 1978, el cual, establece: “las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”. Sus antecedentes se remontan al siglo XIX, puesto que gracias al liberalismo, se logra que los ciudadanos puedan presenciar las actuaciones judiciales (Sánchez, 2014). Como se ha expuesto, lo que se pretendía en un primer momento era que la ciudadanía pudiera asistir físicamente a la celebración del juicio, pero para que la información no solo se ciñera a los allí presentes y respondiendo a las exigencias de una sociedad globalizada, se pensó que la mejor forma de hacer llegar la información a toda la ciudadanía, fuera mediante los medios de comunicación (Aguilar, 2010; Sánchez, 2014).

Esta garantía de control sobre la Administración de Justicia, se materializa en la denominada responsabilidad social de juez/a, donde las resoluciones judiciales son sometidas a la crítica pública. Todo lo expuesto, se consagra en el principio de publicidad, el cual permite la construcción, no solo de una opinión crítica sino también de un espíritu cívico (Montalvo, 2012).

La doctrina judicial considera que el principio de publicidad responde a dos vertientes. Por un lado, al derecho a un proceso público y, por otro lado, a la necesidad de asegurar la transparencia de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración de

¿Víctimas o victimarias?

Justicia, contribuyendo con ello a la transparencia y al control de tales actuaciones por la opinión pública (Montalvo, 2012).

Como se desprende del artículo 120.1 de nuestra Carta Magna, existen excepciones en relación al principio de publicidad, mayoritariamente para hacer efectivo el derecho a una tutela judicial efectiva, pues ésta podría verse vulnerada por la información que pudiera suministrarse a la opinión pública, ya que podría poner en peligro los derechos de las partes implicadas o el favorable transcurso del proceso judicial. Asimismo, las excepciones siempre deben estar autorizadas por una ley (Montalvo, 2012).

En España, el Consejo General del Poder Judicial no estableció unas pautas para garantizar la información de las actuaciones judiciales hasta el 2004. Hasta ese año el acceso periodístico a los órganos judiciales no solo no estaba garantizado, sino que además se encontraban con numerosos obstáculos, principalmente de la mano de los propios funcionarios. Esto ha provocado que la relación entre los profesionales del periodismo y las autoridades judiciales sea complicada, ya que ante los problemas de acceso y la falta de una información completa, provoca que en muchas ocasiones se emitan mensajes periodísticos fragmentados o se recojan únicamente las declaraciones de las partes implicadas, donde la subjetividad enturbia la objetividad esperada (Sánchez, 2014).

La eficacia del principio de publicidad puede verse perjudicada tanto por los juicios previos como por los juicios paralelos. Mientras que los juicios previos son llevados a cabo antes de que comience el proceso judicial, los juicios paralelos son simultáneos a éste. Esta última figura puede entenderse como:

Aquel conjunto de informaciones y noticias, acompañadas de juicios de valor más o menos explícitos, difundidas durante un determinado período de tiempo en los medios de comunicación sobre un caso, y con independencia de la fase procesal en la que se encuentre (Montalvo, 2012, p.111).

Diversos casos por su impacto público acaban despertando el interés de los medios de comunicación, y por consiguiente, que se inicien juicios paralelos. Un claro ejemplo de ello, son los casos de corrupción, pues al afectar a intereses sociales colectivos, hacen que estén bajo la lupa de la opinión pública.

¿Víctimas o victimarias?

Como comentamos en el capítulo anterior, el reproche social de los delincuentes de cuello blanco es un tema reciente que se puso en auge debido a la crisis económica. Anteriormente este asunto pasaba desapercibido por el conjunto de la sociedad, pues el estatus social, la honorabilidad y respetabilidad que se presuponían a estas personas opacaban sus intenciones delictivas. El sentimiento de indignación popular y los juicios de valor introducidos por los profesionales del periodismo han creado un caldo de cultivo explosivo, pudiendo afectar no solo a la garantía de una tutela judicial efectiva sino también al derecho de presunción de inocencia (Artículo 24 de la Constitución).

En los juicios paralelos entran en confrontación el derecho a la libertad de expresión y los derechos personales (Montalvo, 2012). El derecho de libertad de expresión contemplado en el artículo 20.1.a) de la Constitución Española manifiesta: “Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Sin embargo, prosigue el citado artículo en el apartado d): “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Es necesario resaltar la palabra “VERAZ”, ya que las informaciones derivadas de los juicios paralelos suelen ser sesgadas, fragmentadas y descontextualizadas (Montalvo, 2012).

Particularmente los escándalos de corrupción política, suelen generar un clima de intercambios de opiniones y de valoraciones subjetivas bastante activo. Durante este proceso se va a construir un aura de estigmatización sobre el autor o la autora del presunto delito, que cobra especial sentido por las etiquetas y roles adjudicados previamente por los medios de comunicación (Sánchez, 2014).

Si al fenómeno del impacto mediático de la criminalidad de cuello blanco, le aplicamos la perspectiva de género podemos obtener datos reveladores.

Mientras que los medios de comunicación se centran únicamente en la actividad política, empresarial o económica de los delincuentes de cuello blanco, en el caso de sus compañeras se les cuestiona mayormente en aras de su feminidad, es decir, en relación al vestuario que utilizan, en qué gastan el dinero, analizar su comportamiento, es decir, si cumplen o no con sus obligaciones familiares, encrucijadas amorosas, etc. Esto hace

¿Víctimas o victimarias?

que nos remontemos a las teorías criminológicas tradicionales, en las cuales se prestaba mayor atención la desviación del rol de feminidad que al propio hecho delictivo en sí.

Por ejemplo, tras la salida a la luz de la “trama Gürtel”, a Carmen Rodríguez Quijano, una de las investigadas, se le cuestionó el precio de un vestido que utilizó para asistir a la boda de la hija del ex presidente Aznar⁴⁵.

Por otro lado, Rosalía Iglesias ha visto cuestionada su capacidad profesional que le permitió dar el salto a la Alianza Popular:

Si bien en su ciudad natal aseguran que su noviazgo con el hijo de un militar llamado Óscar la ayudó a entrar en Alianza Popular, otros apuntan que su trabajo en una peletería fue el pasaporte de acceso al partido. «Como dependienta conoció a gente de más nivel», dicen en Astorga⁴⁶.

Sobre Ana Mato, ex ministra de Sanidad del Partido Popular, los medios de comunicación se centraron en su ex relación sentimental con Jesús Sepúlveda y la relación extramatrimonial de éste que derivó en un proceso de separación⁴⁷.

No obstante, la prensa rosa no dudó en “acompañar” a la cantante Isabel Pantoja durante todo su proceso judicial y posterior internamiento penitenciario. De igual modo, periódicos como *La voz de Galicia* se alzaban con titulares como este: “Isabel Pantoja: de ser la viuda de España a condenada por blanqueo”⁴⁸. Condena mediática que en parte fue fomentada por la participación de Maite Zaldívar en distintos platós de televisión donde relataba el abandono de su marido y la gran reticencia que sentía por la cantante.

Finalmente, haremos referencia a Cristina de Borbón, presentada mediáticamente como la “gran víctima”, cobrando especial relevancia su relación con los demás miembros de la Casa Real⁴⁹. Ella misma llegó afirmar que por pertenecer a la familia real española ha sido objeto de mayor escrutinio y reproche público.

⁴⁵ Miranda, Beatriz (8 de Diciembre de 2013). La historia real del Caprile de la mujer de Correa. El Mundo. Recuperado: <http://www.elmundo.es/loc/2013/12/08/52a211360ab740b4088b456e.html>.

⁴⁶ Pina, María (25 de Mayo de 2013) Rosalía Iglesias, de Verstrynge a Bárcenas. ABC. Recuperado: <http://www.abc.es/estilo/gente/20130525/abci-rosalia-iglesias-vestrynge-barcanas-201305242006.html>.

⁴⁷ Informalia (9 de Febrero de 2017). Las historias de Ana Mato y la mujer que se interpuso en su matrimonio con el corrupto Jesús Sepúlveda. El Economista. Recuperado: <http://informalia.economista.es/informalia/actualidad/noticias/8143489/02/17/Ana-Mato-y-la-mujer-que-destrozo-su-matrimonio-con-el-corrupto-Jesus-Sepulveda.html>.

⁴⁸ Pérez, M. (16 de Abril de 2013). Isabel Pantoja: de ser la viuda de España a condenada por blanqueo. La voz de Galicia. Recuperado: <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2013/04/15/isabel-pantoja-viuda-espana-condenada-blanqueo/00031366047121481354938.htm>.

⁴⁹ Font, Consuelo. (13 de Junio de 2017). A pesar de su inocencia, la Infanta Cristina cumple años alejada de la familia real. El Mundo. Recuperado: <http://www.elmundo.es/loc/2017/06/13/593fb7e222601ddd6e8b460f.html>.

¿Víctimas o victimarias?

Como hemos podido observar, las mujeres ocupan un segundo plano en las tramas de la corrupción, siendo presentadas como “la esposa de”, “la ex mujer de” o “la hermana de”. Son consideradas como meros apéndices, obviando en todo momento su capacidad de autonomía. Mediáticamente condenadas, no por el hecho por el que se les investiga, sino principalmente por el estereotipo de feminidad o la relación que mantengan con sus compañeros varones.

CONCLUSIONES.

Las conclusiones que podemos extraer de nuestro trabajo de investigación van a quedar plasmadas a continuación.

El interés de la criminología por conocer la casuística de la delincuencia ha pasado por alto la realidad criminológica femenina, pues a día de hoy los estudios al respecto son escasos e incluso se podría decir que sesgados, pues la inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones criminológicas brilla por su ausencia. Las teorías criminológicas tradicionales, las cuales adolecían de un fuerte contenido misógino, puesto que respondían a los intereses del sistema patriarcal, prestaban mayor atención a la desviación del rol femenino que al propio hecho delictivo en sí, concibiendo desde un plano victimal a las integrantes del colectivo femenino como seres necesitados de corrección y tutela masculina.

Las mujeres van a verse envueltas bajo una espiral de represión mucho más rígida que los varones. Ésta va a ser ejercida por los actores socializadores, familia, escuela, grupo de iguales, medios de comunicación, etc. Los cuales desde su más tierna infancia, les van a ir dictaminando como deben actuar conforme a la posición que les ha tocado ocupar en la sociedad por el hecho de pertenecer al sexo femenino. Esta construcción sociocultural creada en torno al sexo, conocida comúnmente como género, va a incidir directamente a la hora de iniciar una carrera delictiva, ya que el ámbito delictual ha sido liderado mayoritariamente por los hombres, pues a ellos en ningún momento se les ha cuestionado su capacidad criminal.

Un severo control social informal junto a la dominación masculina sobre las mujeres, pueden explicar que las cifras de delincuencia femenina sean mínimas respecto a la masculina, pues como ya manifestó Zaffaroni, el derecho penal se encarga de controlar a los controladores. No obstante, hay que destacar que las mujeres poseen una capacidad criminal similar a la de sus compañeros varones, solo que ésta se ve altamente reprimida por agentes externos a su voluntad.

Las causas de la criminalidad femenina están íntimamente sujetas a dos factores: al género y la clase social. Ambos son determinantes a la hora de abordar el estudio de la delincuencia femenina. Por un lado, el género va a influir en la decisión de iniciar una experiencia delictiva así como en la elección del modus operandi, mientras que, por otro

lado, la clase social va a incidir en la motivación delictual, es decir, en las causas por las que cometen el delito.

Nuestro estudio ha tomado como base estructural los dos elementos citados anteriormente, con la finalidad de ahondar no solo en la criminalidad femenina convencional sino también en la criminalidad de cuello blanco. Esta separación delictual ya la realizó en el siglo XX, Edwin Sutherland, en su obra *White Collar Crime*, sin embargo, este sociólogo elaboró la teoría de la delincuencia de cuello blanco desde una visión masculinista, obviando la posibilidad de que las mujeres pudieran participar en esta esfera delictual.

Las representantes de la delincuencia convencional pertenecen a las clases sociales más desfavorecidas y suelen llevar a cabo principalmente delitos patrimoniales no violentos y delitos contra la salud pública, pues son tipologías delictuales que les permite hacer frente a la situación de precariedad económica en la que viven inmersas o satisfacer la dependencia que tienen a sustancias tóxicas, en el caso de que sufran alguna toxicomanía. Estas dos tipologías delictivas son las que provocan en mayor medida que las mujeres cumplan una pena privativa de libertad, ya que son las más recurrentes dentro del colectivo femenino puesto que permiten la obtención inmediata de recursos económicos. Es una delincuencia funcional, ya que la mayoría de mujeres que cometen delitos de estas características lo hacen para combatir el empobrecimiento y las causas derivadas de éste, es decir, la falta de recursos para satisfacer necesidades básicas, inestable acceso al empleo, trabajos precarios, etc.

En las últimas décadas estamos asistiendo a una creciente irrupción de las mujeres en la criminalidad femenina de cuello blanco. A diferencia de las delincuentes convencionales, las delincuentes de cuello blanco pertenecen a las clases sociales más altas y, por ende, gozan de un alto poder adquisitivo. Un porcentaje considerable ocupan algún puesto político, empresarial o público dentro de la Administración, lo cual facilita la comisión de este tipo de actos delictivos. Los delitos más representativos dentro de esta categoría son los delitos contra el orden socioeconómico como, por ejemplo, el blanqueo de capitales y los delitos societarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia. Sin embargo, éste último es también compatible con la delincuencia convencional, a pesar de ello, el texto penal hace una especial previsión cuando el delito

¿Víctimas o victimarias?

es cometido por una autoridad pública, docente, trabajador/a social, etc. Generalmente, las delinquentes de cuello blanco suelen cometer los delitos junto a sus cónyuges, parejas o con quienes mantienen una relación análoga de afectividad. En este sentido, se puede afirmar que dentro de este colectivo es más perceptible la coautoría que en la delincuencia convencional.

En cuanto a la persecución penal cabe expresar que ésta es cada vez mayor, ya que los casos susceptibles de corrupción generan un gran debate dentro de la opinión pública pero, por el contrario, suelen gozar de mayores absoluciones en los procesos judiciales, ya sea por sus influencias políticas y económicas, por tener a su mano a los mejores representantes de la abogacía o por la eficacia de la nueva estrategia defensiva, popularmente conocida como la teoría del amor. Dichos elementos no están a la mano de las integrantes de la delincuencia convencional, sin obviar que la propia maquinaria legislativa sigue cebándose con la criminalidad común mientras que se muestra benevolente con la criminalidad de cuello blanco. Mientras que al primer colectivo se les aplica mayoritariamente penas privativas de libertad elevadas, las representantes de la criminalidad de cuello blanco suelen responder a penas pecuniarias o a la responsabilidad civil derivada del delito, en el caso de no ser absueltas.

Volviendo a la teoría del amor cabe resaltar que es una de las estrategias defensivas más empleadas en los últimos tiempos por las delinquentes de cuello blanco. Es llamativo que al ser defendidas por diferentes letrados siempre suelen hacer uso de la misma táctica. Al respecto, hay que mencionar que el mundo de los sentimientos y, por consiguiente, del amor, ha sido liderado tradicionalmente por las mujeres. No obstante, no es una capacidad innata femenina sino una construcción sociocultural que ha servido para justificar la subordinación y la dominación femenina, es decir, es una estrategia que ha operado con la finalidad de lograr los intereses del sistema patriarcal.

A tenor de lo expuesto, llama la atención que en pleno siglo XXI, sean las propias mujeres las que utilicen esta maniobra para eludir la responsabilidad de sus actos. Hacen uso de una estrategia que en sí misma las discrimina y las subordina, presentándose ante la sociedad como seres acríticos, ignorantes y sujetos únicamente a la esfera emocional y al criterio masculino. Este planteamiento entronca frontalmente con el sentimiento de independencia, emancipación y de sentimiento crítico por los que el movimiento feminista ha luchado incesantemente.

¿Víctimas o victimarias?

Se podría afirmar, que responden al estereotipo tradicional de feminidad, es decir, son mujeres sin capacidad crítica, movidas por el amor hacia su cónyuge o pareja, las cuales llevarían a cabo una actividad laboral complementaria, ya que su principal función sería el cuidado de su prole y en cuyas familias existe un reparto de roles sexista, donde la figura masculina sigue siendo el encargado de proveer económicamente a la familia y el de tomar las decisiones en el hogar y fuera de él.

Ello provocaría que el reproche social fuese menor, en un principio, respecto a las integrantes de la delincuencia convencional, pues éstas últimas al pertenecer a las clases sociales más desfavorecidas, suelen sufrir el estigma de la marginalización y todo lo que ello conlleva. Entraría en juego una visión estereotipada que se cebaría especialmente con aquellas mujeres que se habrían desviado del rol de feminidad, principalmente con las toxicómanas, infanticidas, etc. Retrocediendo hasta las teorías lombrosianas donde las delincuentes eran consideradas como un “doble monstruo”, pues no solo habían cometido un delito sino que además habían transgredido las normas de género.

Llegadas y llegados a este punto, podríamos afirmar que aquellas mujeres que cumplen con el estereotipo de feminidad recibirán un trato policial y judicial menos rígido que aquellas que lo rechazan. Este aspecto lo contemplan algunas teorías criminológicas bajo el concepto de trato de caballerosidad. Según esta teoría, las mujeres serían tratadas de una manera más benévola que los hombres por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino. A su vez, entraría en juego la visión paternalista, que las presenta como víctimas al haberse desviado del camino de la feminidad y que son necesitadas de corrección y tutela.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como las autoridades judiciales tienen la obligación de aplicar de manera efectiva el trato igualitario y no discriminatorio, pero a pesar de que exista una igualdad formal aún a día de hoy hay casos que vislumbran un trato abusivo y discriminatorio en base a criterios como el sexo, género, orientación sexual, nacionalidad, clase social, etc.

Finalmente, haremos alusión al impacto mediático de la criminalidad de cuello blanco. Los representantes de este tipo de criminalidad, por el estatus social que ostentan y los cargos políticos, empresariales y económicos que ocupan suelen

¿Víctimas o victimarias?

encontrarse bajo la mirada de la opinión pública, especialmente si están siendo investigados dentro de una trama de corrupción.

En los últimos años, los escándalos por corrupción están ocupando las primeras páginas de los periódicos o abriendo los informativos televisivos. Aunque anteriormente el reproche social sobre estas conductas era menor, en los últimos años se está creando una conciencia ciudadana sobre la corrupción, lo cual se está viendo reforzado por el cada vez mayor número de casos de estas características, generándose sentimientos de indignación y desconfianza hacia las instituciones públicas, políticas y económicas. Ante esta situación, la Administración ha encontrado en el principio de publicidad a su mejor aliado, ofreciendo información sobre las actuaciones judiciales para garantizar la transparencia y restablecer la confianza de la ciudadanía en tales instituciones.

Aplicando la perspectiva de género al impacto mediático de la criminalidad femenina hay que destacar que mientras que a los hombres se les cuestiona en función del cargo que ocupan, a las mujeres se les polemiza sobre su indumentaria, encrucijadas amorosas, en qué gastan el dinero, etc. Aspectos que nada tienen que ver con el hecho presuntamente delictivo en sí. Son contempladas desde la periferia como “esposa de”, “ex mujer de”, “hermana de” y no como sujetos que estén dotados de individualidad.

Para finalizar, es necesario afirmar que la criminalidad de cuello blanco está cobrando cada vez mayor presencia mediática opacando a la criminalidad convencional, la cual solo tomaría un primer plano en caso de ser excesivamente violenta o alarmante, elementos que no son frecuentes dentro de la criminalidad convencional femenina.

Para concluir el trabajo me gustaría hacer un llamamiento a los criminólogos y criminólogas para que empiecen a investigar sobre la delincuencia femenina desde una perspectiva de género, es un campo delictual fascinante y del que aún quedan muchas aristas por descubrir. Solo de esta manera podemos afirmar que disponemos de un verdadero conocimiento criminológico, en el cual se tenga en cuenta a los dos integrantes de la criminalidad: hombres y mujeres.

¿Víctimas o victimarias?

Daly, Kathleen y Chesney-Lind, Meda. (1988). "Feminism and Criminology". *En Justice Quarterly*, Vol.5 N°4: 497-538.

De la Parte Polanco, Maite. (2016). "El encubrimiento como elemento determinante del blanqueo de capitales". *En Legaltoday*. Recuperado: <http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/el-encubrimiento-como-elemento-determinante-del-blanqueo-de-capitales>.

Del Carpio Delgado, Juana. (2015). "La regulación de los delitos de hurto tras la reforma de 2015 del Código Penal". *En Diario La Ley*, nº 8642.

Fernández, María Dolores. (1993). "Condición femenina y represión". *En Estudios penales y criminológicos XVI*: 8-42.

Freud, Sigmund. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. Buenos Aires: Amorrortu.

Galindo, Gema. (2002). Galerianas, corrigendas y presas. Nacimiento y consolidación de las cárceles de mujeres en España (1608-1913). Madrid: Edisofer.

García, Carmen. (1995). "Feminismo y criminología". *En Capítulo Criminológico*, vol. 23, núm. 2: 445-456.

García Pérez, Octavio. (2008). Encubrimiento y su problemática en el Código Penal. Barcelona: Atelier.

González Casanova, Pablo. (2004). Las nuevas ciencias y las humanidades. De la academia a la política. Anthropos: Barcelona.

Guardiá i Serentill, Meritxell. (2014) "La reforma del Código Penal: Entre el paternalismo y la severidad punitiva hacia las mujeres". *En Pikara magazine*. Recuperado: <http://www.pikaramagazine.com/2014/02/la-reforma-del-codigo-penal-entre-el-paternalismo-y-la-severidad-punitiva-hacia-las-mujeres/>.

Harding, Sandra. (1987). Feminism and Methodology. Bloomington/Indianápolis: Indiana University Press.

Harding, Sandra. (1996). Ciencia y Feminismo. Madrid: Ediciones Morata.

Herrera Gómez, Coral. (2011). "El amor romántico desde una perspectiva científica. ¿Por qué y para qué estudiar el amor?". Recuperado: https://www.google.es/search?source=hp&q=haikita&oq=haikita&gs_l=psy-

¿Víctimas o victimarias?

ab.3..0j0i10i30k113.252.1206.0.1452.7.6.0.0.0.0.293.783.0j3j1.4.0....0...1.1.64.psy-ab..3.4.779...0i131k1j0i10k1.N51XC75n60A.

Herrera, Gómez, Coral. (2011). Más allá de las etiquetas: Mujeres, hombres y Trans. Bizkaia: Editorial Txalaparta.

Herrera Gómez, Coral. (2012). “¿Qué es el amor?”. Recuperado: <http://haikita.blogspot.com.es/2010/03/que-es-el-amor-el-amor-de-enamoramiento.html>

Herrera Gómez, Coral. (2012). “Los mitos románticos en la cultura occidental”. Recuperado: <http://haikita.blogspot.com.es/2012/05/los-mitos-del-amor-romantico-en-la.html>.

Instituto Nacional de Estadística. (2015). Recuperado: <http://www.ine.es/>.

Keller, Evelyn. (2001). “Reflexiones sobre género y ciencia”. En *Asparkía, Revista Universitat Jaume I* n° 12: 149-153.

Lagarde, Marcela. (2001). Claves feministas para la negociación en el amor. Managua: Puntos de encuentro.

Larrauri, Elena. (1994). Mujeres, Derecho Penal y Criminología. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A.

Lima Malvido, María de la Luz. (1988). Criminalidad femenina. Teorías y Reacción social. México: Porrúa. S.A.

Lombroso, Cesare y Ferrero Guglielmo. (1892). La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, ed. Et al, 2009, Varesina (edición con estudio preliminar de Mary Gibson e Nicole Hahn Rafter.

Lombroso, Cesare y Ferrero, William. (1898). The Female offender. New York: D. Appleton and company.

López Noguero, Fernando. (2002). “El análisis de contenido como método de investigación”. En *Revista de educación, Universidad de Huelva*, n°4: 167-179.

Marco Francia, María Pilar. (2011). “Las excusas absolutorias en la legislación y jurisprudencia española. A propósito de la circular 2/2009 de la Fiscalía General del Estado”. En *Noticias Jurídicas*. Recuperado: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4644-las-excusas->

¿Víctimas o victimarias?

absolutorias-en-la-legislacion-y-jurisprudencia-espanola-a-proposito-de-la-circular-2-2009-de-la-fiscalia-general-del-estado/.

Miralles, Teresa. (1983). “La mujer: el control informal”. En *Pensamiento Criminológico Volumen II: Estado y Control: 121-148*.

Montalvo Abiol, Juan Carlos. (2012). “Los juicios paralelos en el proceso penal: ¿Anomalía democrática o mal necesario?”. En *Revista de Filosofía, Derecho y Política*, n° 16: 105-125.

Nash, Mary. (2004). *Mujeres en el Mundo. Historia, retos y movimientos*. Madrid: Alianza Editorial.

Olza Sanz, Iñigo. (2014). “La excusa absolutoria del artículo 268 del Código Penal. Navarra”. Recuperado: <http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/14545/Olza%20Sanz%2C%20I%C3%B1igo.pdf?sequence=1>.

Ortega y Gasset, José. (1941). *Estudios sobre el amor*. Madrid: Revista de Occidente.

Puente, Alba. (2012). “Perspectivas de género en las condenas por tráfico de drogas”. *Oñati Socio-legal Series*, 2 (6): 97-121.

Quetelet, Adolphe. (1835). *Sur l'homme et le développement de ses facultés: ou, Essai de physique sociale*. París: Bachelier, Imprimeur – libraire.

Rasillo López, Mª Del Pilar. (2016). “Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015 (II). Delitos contra la Administración Pública. Recuperado: http://www.elderecho.com/tribuna/penal/Delitos-corrupcion-administracion-publica-reforma-Codigo-Penal_11_1033180001.html.

Rives Seva, Antonio Pablo. (2014). “Los delitos societarios. Análisis de la jurisprudencia del tribunal supremo”. Recuperado: <https://www.seguridadpublica.es/2014/02/los-delitos-societarios-analisis-de-la-jurisprudencia-del-tribunal-supremo/>.

Rubin, Gayle. (1975). “The Traffic in women: Notes on the political economy of sex”. Recuperado: <https://genderstudiesgroupdu.files.wordpress.com/2014/08/the-traffic-in-women.pdf>.

¿Víctimas o victimarias?

Sánchez, Mariana. (2004). “La mujer en la teoría criminológica”. En *La Ventana* n° 20: 240-266.

Sánchez Esparza, Marta. (2014). La construcción periodística del relato de la corrupción: análisis del tratamiento informativo del caso Malaya. Málaga: Publicaciones y Divulgación científica. Universidad de Málaga.

Santos, Marcela y Acero, Haydee. (1994). “Mujer y Criminología”. En *Lecciones y Ensayos .Departamento de publicaciones Universidad de Buenos Aires* 60-61:195-208.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Recuperado: <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html>.

Stolcke, V. (1992). “¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad?” En *Mientras Tanto*, vol. 48: 87-111.

Sutherland, E. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: Ed. Lippincott.

Sutherland, Edwin. (1988). *Delincuencia de cuello blanco en Ladrones profesionales*. Madrid: La Piqueta.

Sutherland, Edwin. (1999). *El delito de cuello blanco*. Madrid: La Piqueta.

Virgolini, Julio. (2004). *Crímenes excelentes: delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción*. Buenos Aires: Editores del Puerto.

Zaffaroni, Ernesto Raúl. (2000). “El discurso feminista y el poder punitivo” en Haydée Birgin (compilador). *Las trampas del poder punitivo: el género en el Derecho Penal*. Buenos Aires: Bilbos.

Zaffaroni, Ernesto Raúl. (2009). *En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico- penal*. Buenos Aires: Ediar.

Zúñiga Rodríguez, Laura. (2015). “Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco”. En *Revista del Instituto de ciencias jurídicas de Puebla (México)* Vol. 9 n°35. Recuperado: <http://revistaius.com/index.php/ius/article/view/110/566>.

¿Víctimas o victimarias?

Legislación:

Constitución Española de 1978. (B.O.E., nº 311, de 29 de diciembre de 1978).

Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Ley 10/2010, de 28 de abril. (B.O.E., núm. 103 de 29 de abril de 2010).

Ley Orgánica del Código Penal. Ley 10/1995, de 23 de noviembre de 1995. (B.O.E., núm. 281 de 24 de Noviembre de 1995).

Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ley 5/2010, de 22 de junio. (B.O.E., núm. 152 de 23 de junio de 2010).

Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Ley 7/2012, de 27 de diciembre. (B.O.E., núm. 312 de 28 de diciembre de 2012).

Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ley 1/2015, de 30 de marzo de 2015. (B.O.E., núm. 77 de 31 de marzo de 2015).